

NOVIEMBRE 30 DE 1934

63ª REUNION — 5ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDENCIA DE LOS DOCTORES ANTENOR R. FERREIRA Y ROBERTO J. NOBLE

MINISTRO PRESENTE: de Hacienda, doctor Federico Pinedo; DIPUTADOS PRESENTES: Agüero Santos, Ahumada Luis Alberto, Alonso Alfredo J., Amadeo y Videla Daniel, Ameri Rogelio L., Amodeo Aurelio F., Andreis Fernando de, Araújo Ernesto M., Arca José, Arnoldi Adolfo, Arrieta Herminio, Basualdo Honorio, Benegas Tiburcio, Bermúdez Manuel A., Besasso Manuel V., Biancofiore Rafael, Bogliolo Rómulo, Bonazzola Carlos F., Briuolo Miguel, Bruchou Eduardo, Bulra Demetrio, Buitrago Pedro, Bunge Augusto, Bustillo José M., Buyán Marcelino, Cáceres Lorenzo, Cafferata Juan F., Candia Cornelio, Cárcano Miguel Angel, Carreras Ernesto L. de las, Carús Agustín J., Castañeiras Alejandro, Castro Felipe, Coca Joaquín, Contto José A., Cordero Octavio, Corominas Segura Rodolfo, Costa Méndez Nicanor, Courel Carlos D., Dávila Miguel V., Degano Alfredo, Della Latta Jerónimo, De Miguel Benito, Dickmann Adolfo, Dickmann Enrique, Escalera Facundo, Escobar Adrián C., Fernández Damián, Ferreira Antenor R., Ganza Marcelino, García Gorostiaga Raúl, Ghioldi Américo, Giménez Angel M., Godfrid Juan, Godoy Raúl, Gómez Rincón Abel, González Benjamín S., González Guericco Manuel, González Masada Manuel, González Valentín, Graffigna Santiago, Grisolia Luis, Groppo Pedro, Guglielmelli Aquiles M., Iribarne Alberto, Iriando Urbano de, Jardel Enrique C., Korn Guillermo, Lamasa Juan B., López Héctor S., Mancini Rafael, Martínez José Heriberto, Mattos Luis María, Molina Serapio, Moret Carlos (h.), Morrogh Bernard Juan F., Mouchet Enrique, Movsiehoff Bernardo, Noble Julio A., Noble Roberto J., Oddone Jacinto, Padilla Tiburcio, Palacín Manuel, Palacín Pedro, Palacín Benjamín, Palmeiro José, Penna José Luis, Pérez Leirós Francisco, Pfeleger José E., Pintos Angel, Pita Carlos A., Prussacco Juan P., Pueyrredon Carlos A., Quiroga Félix, Radfo Pedro, Ramiconi Luis, Ramírez Manuel (h.), Repetto Agustín, Repetto Nicolás, Rodríguez Alfredo, Rozas José E., Ruggieri Silvio L., Ruiz Oscar, Salas José Raquel, Salcedo Saturnino, Santillán Enrique, Sellarés Avelino, Simón Padrós Juan, Solari Felipe O., Solari Juan Antonio, Solís Rogelio J., Speroni Daniel C., Spinetto Alfredo L., Taboada Mora Cipriano, Uriburu Francisco, Vega Abraham de la, Vicchi Adolfo A., Vidal Baigorri José, Videla Dorna Daniel, Videla Rodolfo G., Vionnet Rodolfo L., Zarazaga Marcial J., Zerda Justiniano de la; AUSENTES, C O N LICENCIA: Aguirre Zubala Miguel A., Araújo Eudoro H., Araújo José Ignacio, Becerra Eugenio A. (H.), Bosano Ansaldo Daniel, Calderón Osvaldo M., Espil Alberto, Fresco Manuel A., Garayalde José María, Herrera Bruno J., Inda Rufino, Lima Vicente Solano, Magris Amleto, Marad Cipriano F., Mouesca Eduardo, Ocampo Enrique, Parera Gregorio, Rojas Marcos E., Saravia José M.; CON AVISO O: Carreras José, Parodi Misael J., Pomponio Vicente F., Schoo Lastra Dionisio; SIN AVISO: Acosta Guillermo, Orito Miguel, Lencinas Rafael Néstor, Manacorda Carlos, Ruiz Guinazú Jacinto, Vallejo Luis A., Vignart Uberto F., Wade Eugenio.

## SUMARIO

rroga y distribución del impuesto a los  
réditos y del impuesto a las ventas.

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Acta.
- 3.—Asuntos entrados:

T.—Despacho de comisión.

II.—Peticiónes particulares.

- 4.—Se considera el despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo en las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley sobre reforma de las leyes de jubilación de empleados y obreros ferroviarios. Ro., rechazadas.
- 6.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley sobre unificación de impuestos internos, pró-

- 6.—Fijación de días de sesión para la semana próxima.
- 7.—Indicación del señor diputado Dickmann (E.), referente a la acústica del recinto.
- 8.—Asunta entrado:

III.—Mensaje del Poder Ejecutivo informando sobre las operaciones de la Junta Reguladora de Granos.

- 9.—Continúa la consideración del asunto a que se refiere el número 5.

—En Buenos Aires, a treinta de  
Noviembre de 1934, siendo la hora  
15 y 28:

1

## MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Costa Méndez. — Pido la palabra.

Si hay número en la casa, propongo que se espere un cuarto de hora.

Sr. Presidenta (Ferreira). — Hay número en la casa, y si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

—A la hora 15 y 37:

2

## ACTA

Sr. Presidente (Ferreira). — Queda abierta la sesión con la presencia de 80 señores diputados.

- Por indicación del señor diputado Bustillo, se suprimió la lectura del acta y se da por aprobada.

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

3

## ASUNTOS ENTRADOS

1

## Despacho de comisión

## LEGISLACIÓN DEL TRABAJO:

En las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que le fué pasado en revisión, sobre reformas a la ley de jubilaciones y pensiones ferroviarias.

—A la orden del día.

## II

## Peticiones particulares

El Centro de Jubilados y Pensionistas Ferroviarios formula observaciones al proyecto de reformas a la ley de jubilaciones y pensiones ferroviarias. (A la Comisión de Legislación del Trabajo).

—El señor Antonio Manuel Molinari acompaña antecedentes relacionados con la cuestión de privilegios promovida por un señor diputado. (A la Comisión de Negocios Constitucionales).

- El Centro de Almaceneros y Asociaciones Comerciales solicita el rechazo del proyecto de ley de impuesto a las ventas. (A sus antecedentes).

- El señor Hermelindo Rocha amplía los fundamentos del pedido de juicio político al señor juez de instrucción de la Capital, doctor Luis A. Barberis. (A la Comisión de Justicia).

## SOLICITUD DE SUBSIDIO:

Sociedad Cultural Diapason.

—A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

4

## JUBILACION DE FERROVIARIOS

## Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación del Trabajo ha estudiado la sanción del Honorable Senado que modifica el proyecto de ley que le fué pasado en revisión, sobre reformas a las leyes vigentes en materia de jubilaciones y pensiones de empleados y obreros ferroviarios; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja desechar las modificaciones introducidas, insistiendo en nuestra anterior sanción.

Sala de la comisión, Noviembre 30 de 1934.

Adolfo A. Vicchi. — Augusto Bunge.

— Carlos Moret (h.). — Francisco

Pérez Leirós. — Luis Alberto Ahumada. — Honorio Busualdo.

Con reservas:

Juan P. Caffarata.

## Sanción de la Honorable Cámara de Diputados

## PROYECTO DE LEY.

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Refórmase la ley 10.650 y las que la han modificado ulteriormente, en

las modificaciones introducidas por el Senado, que no versaban sobre los artículos enviados en revisión por Diputados, sino que aparecían como un proyecto nuevo. Designó una subcomisión que formaron los señores diputados Vicehi, Pérez Leirós y Bunge para que la asesorara. La subcomisión se preocupó seriamente de este asunto, recibió las informaciones de obreros, de los jubilados ferroviarios — gremio importante a quien hay también el deber de escuchar — y por último recibió el informe de la Caja. El gráfico que figura en ese informe es tan ilustrativo que vale todo un discurso. Si los señores diputados no han podido obtenerlos sobre sus bancas en su oportunidad, se debe a la sanción de la Cámara. No es reglamentario protestar contra su resolución pero, a mi juicio, la de tratar, con o sin despacho de comisión este asunto, fué un poco precipitada. Aun cuando la imprenta de la Cámara ha hecho todo el esfuerzo posible para suministrar a los señores diputados todos los antecedentes en oportunidad, no ha podido hacerlo con mayor brevedad.

Por eso los diputados que hacemos reservas sobre esta cuestión, no proponemos presentar oportunamente las modificaciones que creamos pertinentes. Por de pronto hemos entendido, a base del informe de la subcomisión y del de la dirección de la Caja, que la sanción de Diputados era menos mala que la del Senado y por eso, precisamente, con reservas, nosotros le daremos nuestro apoyo.

Nada más.

**Sr. Bunge.** — Que se dé lectura del despacho.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Se va a leer.

—Se lee.

**Sr. Cafferata.** — El señor diputado Bunge me hace notar que las reservas son de parte del diputado que habla.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Quedan rechazadas las modificaciones introducidas por el Honorable Senado.

**Sr. Ghioldi.** — ¿Ha resultado afirmativa por unanimidad?

**Sr. Prosecretario (Madero).** — Afirmativa, por más de dos tercios.

**Sr. Bunge.** — El señor diputado la Vega objeta que tal vez constitucionalmente fuera mejor votar por sí o por no el despacho en votación nominal.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Reglamentariamente la votación está bien hecha.

## 5

### UNIFICACION DE LOS IMPUESTOS INTERNOS

**Sr. Corominas Segura.** — Pido la palabra.

En la sesión de anoche, mientras se desarrollaba el debate en general sobre el proyecto de ley de unificación de impuestos internos, venció el término reglamentario para el uso de la palabra por el diputado del sector socialista que hacía una exposición y no hubo número suficiente de diputados en la Cámara, en ese momento, para que se concediera la prórroga.

No obstante que la decisión adoptada ayer por la Cámara fué en el sentido de que el debate en general terminara en la sesión de anoche, expreso ahora que no hacemos ninguna oposición a que se prolongue el término al referido diputado, que hacía uso de la palabra en ese momento, hasta que concluya su discurso.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Se va a votar si se prorroga el término al Señor diputado por la Capital, que estaba en el uso de la palabra.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Continúa con la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Pena.** — Quería, ante todo, dejar constancia, de que en la orden del

día 137, que comprende dos asuntos, debía figurar la disidencia socialista. No ha podido firmarse por las circunstancias de premura que el señor diputado Ahumada señaló en la sesión de ayer; al explicar las razones de su firma y de una contradicción que apareció con posterioridad. De modo que deseo que S. C. agregue en la orden del día número 137 la disidencia en las dos cuestiones que involucra, y en la primera sobre impuestos internos, con las características de aprobación en general de la idea, pero aplicándose el plan dentro de las líneas generales enunciadas por el señor diputado Ghioldi en nombre del grupo socialista.

En la sesión de ayer quise reducir en sus verdaderas proporciones este proyecto de ley, con el objeto de deshacer un poco la fantasía que a ratos voló por la Cámara, con propósitos de exaltación personal de su autor, o de su declarado autor, con olvido de grandes antecedentes sobre la materia. De ello ha quedado como resultado que el pedestal es tan chico que apenas podrá pasar a la inmortalidad sobre una sola pierna el señor ministro de Hacienda.

Cuando fui interrumpido en mi exposición, deseaba hacer notar una circunstancia que a mi juicio reviste cierto interés, porque en el artículo 22, último del proyecto del Poder Ejecutivo, se dice que la duración de esta ley se fija en 20 años. Pero en el artículo 27, del despacho de la comisión, porque hay agregados posteriores y anteriores que lo extienden hasta el número de 35 artículos, la duración de esta ley se fija en 20 años, agregando: «en lo que respecta a las disposiciones establecidas en los artículos precedentes». El agregado de «los artículos precedentes», que no estaba en el proyecto del Poder Ejecutivo y que aparece en el despacho de la comisión, tiene alguna importancia en cuanto por un artículo anterior se dice que los impuestos del artículo 25, — entre los que están los del vino y del azúcar que tanto nos interesa — quedan consoli-

dados durante el término de diez años a partir del 1º de Enero de 1935. De modo que aparecería el enunciado ulterior del artículo, según lo despachó la comisión, modificando el texto del proyecto del Poder Ejecutivo, estableciendo una prórroga más amplia que la de la iniciativa originaria.

Conviene, no obstante la recomendación del señor ministro de Hacienda de que dejemos la cuestión del azúcar, que insistamos un poco sobre este asunto porque se perpetúa en esta materia una situación de ilegalidad y de abuso. En la sesión del 20 de Septiembre de 1932, presenté a la Cámara un proyecto de resolución en los siguientes términos: «La Honorable Cámara declara que es ilegal la existencia de la Comisión Nacional del Azúcar por no haber sido reconocida por el Congreso su constitución; y declara asimismo que es ilegal e inconstitucional la fijación de derechos adicionales a la importación de azúcar. Esta iniciativa la presenté conjuntamente con otra que declaraba en situación de incompatibilidad a dos diputados nacionales que integraban esa comisión del azúcar en representación de los industriales y los cañeros. El proyecto, respecto a la incompatibilidad de los diputados, fue rechazado por la Cámara, y el anterior, que se refiere a la comisión del azúcar, por pedido del actual ministro de Hacienda, entonces diputado Pinedo, pasó a estudio de la Comisión de Negocios Constitucionales, cuyo dictamen hemos esperado infructuosamente hasta este momento, a pesar de haberlo reclamado en algunas oportunidades.

El señor ministro de Hacienda, ayer habló, repitiendo frases que anteriormente dijera, como diputado, de los decretos leyes. Lo recuerdo exactamente que, con el propósito de normalizar el conjunto de actos oficiales que pudieran perturbar la marcha normal de la administración pública en su relación con los intereses particulares, planteé y obtuve en la Comisión de Presupuesto el despacho de un proyecto de ley por el cual se elevaban a categoría de leyes todos los actos del

Gobierno Provisional que no eran discutidos o que no merecían grandes objeciones. Fueron excluidas, por insistente pedido del diputado Pinedo, dos cuestiones: el azúcar y la yerba.

Sr. Ministro de Hacienda.—Es cierto, y puedo decirle por qué.

Dijimos entonces que lo que se traía a las primeras sesiones extraordinarias de 1932 eran simplemente decretos de impuestos fiscales y que las dos resoluciones del Gobierno Provisional sobre el azúcar y la yerba, que no habían sido firmadas por el ministro de Hacienda de ese gobierno, no tenían carácter fiscal.

Sr. Pena. — Desde luego, estoy recordando el antecedente y no juzgando intenciones.

Sr. Ministro de Hacienda. — Por mi parte, completo el antecedente.

Sr. Pena. — Debo mencionar que el Congreso argentino, por una ley especial, puso orden dictando las disposiciones pertinentes para regularizar un conjunto de situaciones creadas al margen de la ley, y esta cuestión del azúcar quedó pendiente. Fue por eso que yo la planteé en la Cámara con el éxito que los señores diputados acaban de conocer por el recuerdo que he hecho.

En estas condiciones se presenta la iniciativa de la unificación de los impuestos, que tiene mucho, pero mucho que hacer con esta cuestión del azúcar, que en una proporción quizá del 50 o del 60 % está vinculada al problema del azúcar.

De ahí, pues, nuestro interés en que en situación se aclare encontrando una solución a este problema, que no signifique, con esta pretendida unificación de los impuestos, agravar una situación al margen de la ley, situación que viene manteniéndose desde hace algunos años.

Sostengo, señor presidente, que aquel decreto del Gobierno Provisional falsea la ley, la interpreta de una manera completamente distinta a lo que ella autoriza. La ley dice en su artículo 2º: «Los azúcares que se importen y gocen en el país de origen, de prima, sea directa o indirecta, serán recargados

con un derecho adicional equivalente al importe íntegro de las primas concedidas, cualquiera sea la forma de pago o de concesión de las mismas.» ¿Esto es lo que el Gobierno Provisional tiene en cuenta para dictar su decreto?

Debo recordar que esta disposición de la ley argentina tiene su origen en una convención internacional realizada en Bruselas, principalmente inspirada en procedimientos de exportación a dumping, en los que interviene en aquel tiempo la República Argentina. Se adoptó como legislación universal en muchos países para evitar la repetición de esas maniobras por las que se aumenta el precio del mercado interno para mantener la ganancia de los industriales, exportando el producto a menor precio. Y la República Argentina, después, a pesar de haber estado en esa convención, ha exportado azúcar a pérdida. Mientras aquí se vendía a 41 centavos, el azúcar argentino se vendía en Londres a 10 centavos, para mantener la carestía artificial del producto para el pueblo argentino, sacrificado durante tantos años a los intereses de la oligarquía tucumana.

El decreto del Gobierno Provisional estableció un sistema totalmente ajeno a la interpretación de la ley, sistema que consiste en tomar una disposición de la ley de defensa del consumo, de que no puede pasar el precio de 41 centavos el kilo sin rebajarse los derechos para que llegue azúcar del extranjero, y considerar que el azúcar debe valer 41 centavos; de modo que sin denunciar cuáles son las grimas de ningún país, se aplica un derecho adicional para que el precio del azúcar en la aduana resulte siempre de 41 centavos. Es decir que lo que antes era la defensa del consumo frente a la lucha de los industriales argentinos que quisieran superar el precio de 41 centavos, se transforma en la obligación de comer el azúcar a 41 centavos, poniendo arbitrariamente derechos adicionales hasta llegar a esa suma. Si esto está dentro de la ley, sería el caso que SC lo explicara con argumentos que pudieran rebatir a la razón y a la verdad.

Desde la fecha de ese decreto dictado por el Gobierno Provisional, que el Congreso ha dejado sin considerar aceptando que a sus espaldas esté ejerciendo facultades constitucionales de imponer gravamen una comisión integrada por interesados para perjudicar el consumo nacional y el comercio interior, la cual fija, mes a mes, derechos de aduana al azúcar. Todos los meses la comisión eleva al Ministerio de Hacienda su dictamen respecto al derecho aplicable al azúcar extranjero, de modo que siempre queda el precio de cualquier azúcar que pudiera llegar al país recargado de tal modo que valga 41 centavos.

Tengo varias publicaciones que consiguen los derechos aduaneros con que el SC ha cargado al azúcar. Así, en Febrero de 1931 se fijó 4 centavos como máximo, en Mayo 3,57; en 1932 fueron fijados derechos alternativos adicionales entre un mínimo de 1,42 centavos y un máximo de 3,06 centavos; en 1933 de 2,96 a 3,10 centavos. Omitiré el detalle de las cifras porque cato se cumple con regularidad tan admirable que sería de desear fuera extendida y aplicada en todos los órdenes de la administración.

Hemos llegado a un estado de cosas distinto al conocido hasta ahora en el ambiente parlamentario argentino. Ya nadie tiene temor en confesar paladina y públicamente su situación. Antes, sólo sabían de hombres que por delicadeza se excusaban de intervenir en la sanción de leyes que afectaban a sus intereses particulares. Hoy la situación es opuesta. «Yo soy industrial y hago la ley que me conviene». Se lo dice así, y hay que admitirlo y reconocerlo. Es el ambiente parlamentario del momento. Es una cuestión de sensibilidad moral que no podemos distribuir entre todos los hombres y apreciamos cómo se manifiesta haciéndonos cargo de la situación. En la Comisión de Presupuesto, su presidente, el señor diputado Martínez, vinculado por razones que ignoro, a la industria del azúcar, solicitó se le excusara de intervenir en una cuestión que tocaba de

cercos intereses en los que tiene alguna vinculación. Pero nos encontramos también con un caso totalmente contrario. Se trabaja de una manera activa, empeñosa, sin limitación en estructurar la ley dentro de las convenciones conocidas.

Claro está que en otros momentos había bría en la Cámara asombro, diría estupor, ante casos como éstos. Ahora nos hemos acostumbrado. La pertinencia con que se aplica el procedimiento estatal, que hemos llegado a tomar esto como un estado parlamentario normal. Siempre es el señor diputado industrial el que nos ofrece los datos, como dijo ayer, de primera napa. La más contaminada como se sabe. De modo que será importante que aclaremos muy bien qué significa este despacho.

Mientras la provincia de Tucumán gravaba el azúcar, se reducía en la cantidad equivalente la protección aduanera, es decir, obtenía, del fisco tucumano, el margen de diferencia que lo permitía aprovechar para sus arcas el derecho de aduana en la parte que excediera de la protección necesaria; pero Tucumán no podía, por carecer de jurisdicción, sumar el impuesto provincial al de aduana; era imposible hacerlo. ¿Y entonces qué se propone esta legislación? ¿Que aquello que no podía hacer Tucumán lo haga la Nación en su favor? ¿Es esto lo que se persigue? Habrá que aclararlo no toda franqueza, y conviene, ya que el clima parlamentario está tan perturbado, en consonancia con este verano otoñal, que digamos las cosas de acuerdo con los negocios y los intereses, sin ningún rento y sin ninguna clase de consideración. Sabemos que en los negocios la mentira es la ley. Todo el mundo pide el doble; si puede conseguirlo vende y deja convencido al comprador que ha perdido vendiendo; y si se le ofrece la mitad, protesta, se desespera, y si no encuentra cómo venderlo mejor, lo deja por la mitad y gana todavía.

Ahora la Nación, por esta especie de ley contrato celebrado entre partes distintas que son las mismas, entre representantes de las provincias y de la

Nación, n o podrá aumentar n i modificar estos derechos porque quedan consolidados. Antes, las provincias tenían el derecho de aumentarlos tanto como quisieran, sin ninguna limitación que no fuera aquella que les imponía las necesidades de los negocios de sus industriales, que gravitaban decididamente en la política local. Ahora, la Nación no podrá modificarlos, porque quedarán consolidados.

De manera que necesitamos analizar la situación actual de esa industria para saber exactamente qué es lo que debe hacer el Congreso argentino ante esta tentativa de tomar la unificación de los impuestos internos como una manera de hacer en el orden nacional las imposiciones que no había podido hacer la provincia de Tucumán.

Si la situación de la industria azucarera y del pueblo tucumano fuera realmente floreciente y nos compensara a los argentinos de los sacrificios de tantos años y de una protección aduanera tan alta, confieso que en este momento de profunda crisis estaríamos complacidos de poder contemplar el espectáculo de una provincia argentina que pasara las dificultades de este momento en condiciones de no resentirse gravemente su situación social por la crisis nacional y universal. Asistiríamos complacidos a ese oasis económico de Tucumán, que nos permitiera por lo menos la satisfacción de argentinos, de ver que algún resultado tuvo ese esfuerzo y ese sacrificio nacional. Pero la verdad, señor presidente, es muy otra. El señor diputado Simón Padrós nos leyó los salarios de los obreros en las distintas partes donde hay industria azucarera. Claro está que en todas partes ganan poco, y en Tucumán ganan sumas que son incompatibles con el desarrollo industrial.

El señor diputado Simón Padrós nos leyó una cantidad de cifras sobre los salarios obreros de Japón y no sé qué otros países, porque es difícil seguir al señor diputado en esa forma tan rápida de exposición que le permite dar la vuelta al mundo con cifras y datos de toda naturaleza en pocos mi-

nutos. Yo quiero dar datos de fuentes argentinas.

«La Capital», de Rosario, en un comentario que se titula «Rumbo a los ingenios», dice: «Hombres, mujeres, niños, escuálidos, harapientos, son embarrados por que hacienda, amontonados en la más deplorable promiscuidad. Se tiene más consideración y más atención por las cabezas vacunas que con esos desdichados seres humanos. Acoplados los vagones, hacinados, a los trenes de pasajeros, la locomotora arrastra, tal vez protestando, la carga humana que no goza del privilegio que se brinda a la hacienda destinada a la faenamiento.

«Sin embargo, esas caravanas de humildes van a los ingenios. Prefieren el trabajo honesto y rudo y hasta brutal, al ocio, a la inacción. El salario que en ellos perciben es escaso, desde luego; más de la mitad queda en las proveedurías. No obstante ello, no se, descorazonan, quieren vivir aunque no se persuaden de que vegetan.

«El balance de esa vida vegetativa suele alarmar porque las estadísticas empiezan a arrojar sus terribles porcentajes de mortalidad infantil, las crecientes destrucciones de jóvenes de ambos sexos y las elevadas bajas que igualmente determinan, son índices que deben llamar la atención de los poderes públicos y de aquellos que no ven más que fantasmas en el firmamento pero sin bajar para ver las causas que fomentan esos espectáculos tristes que hemos anotado.»

Sr. Simón Padrós. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Pena. — Sí, señor diputado.

Sr. Simón Padrós. — Resulta un poco ridícula la lectura que acaba de hacer el señor diputado después que tantos señores socialistas han presenciado el trabajo y las condiciones del mismo en los ingenios de Tucumán.

Sr. Pena. — Un corresponsal viajero de «La Prensa», diario argentino que se edita en la Capital de la República.

Sr. Simón Padrós. — De ese diario argentino que está atacando continua-

mente las medidas de defensa agrícola-ganadera del gobierno de la Nación.

Sr. Pena. — So tengo ningún motivo de solidaridad ni de disconformidad particular con «La Prensa». El señor diputado lo tiene, no por las medidas financieras, sino por razones industriales.

Se refiere el redactor de «La Prensa», en viaje por la provincia de Jujuy. . .

Sr. Simón Padrós. — ¿Por qué provincia?

Sr. Pena. — Esuche el señor diputado; yo hablo para toda la Cámara.

Sr. Simón Padrós. — Preguntaba de qué provincia.

Sr. Pena. — Por la de Jujuy.

Sr. Simón Padrós. — Ya no hace referencia a Tucumán.

Sr. Pena. — Si el señor diputado cree que todavía cabe agregar algún dato más horroroso, respecto a Tucumán, que sus propias estadísticas. . .

Sr. Simón Padrós. — Usted se olvidó de que con las estadísticas. . .

Sr. Pena. — Siempre que no las fabrique, las estadísticas dirán lo mismo.

Sr. Simón Padrós. — Se olvida del papelón que hizo vez pasada con la estadística de mortalidad.

Sr. Pena. — Voy a traer las estadísticas ahora no más.

—Hablan simultáneamente los señores diputados Simón Padrós y Pena.

Sr. Pena. — No permita al señor diputado que me interrumpa, señor presidente.

Sr. Presidente (Ferreira). — Pido al señor diputado por Tucumán que no interrumpa.

Sr. Pena. — Se refiere al redactor de «La Prensa» a la existencia de un Estado dentro del Estado argentino, y denuncia la situación de explotación ignominiosa de los trabajadores de ese pueblo por una empresa que en Jujuy se desarrolla como ni no fuera parte integrante del territorio argentino el suelo que ocupa. Dice el redactor: «Para el trabajo de cortar la caña no hay ninguna reglamentación, en rigor de verdad, tal como si esa labor no fuera tra-

bajo. So hay horario, no hay feriado, y no hay restricciones para las mujeres y los niños. El peón y su familia, mujer e hijos, si los tiene, trabajan de sol a sol y también de noche. Los nativos de las provincias norteañas y los indios especialmente, aprovechan las noches de luna para continuar la tarea y aumentar su jornal.»

So deseo continuar la lectura de estos documentos públicos argentinos, pero agregaré que refieren lo que ocurre con la policía de los ingenios en Jujuy. según el redactor de «La Prensa»: «Cierta mañana visitamos la comisaría de San Pedro, instalada en una casita a unos 100 metros de la fábrica. Preguntamos al comisario si por casualidad esa casa era particular. Y el funcionario nos respondió: «— No solamente la casa, sino todo lo que usted ve, absolutamente todo, es del ingenio; la empresa nos cede el edificio y todos los muebles, hasta los útiles de escritorio y la tinta; y esas armas — señalando al estante con unos 10 winchesters — pertenecen al ingenio. El gobierno de la provincia sólo envía al comisario y los vigilantes.»

Diremos de paso que es algo conocido y aceptado que ese personal de policía recibe una suma mensual de las empresas, y que está de más subrayar cuál puede ser el grado de independencia de tales comisarios frente a los ingenios, que resultan así, verdaderos superiores jerárquicos de los empleados policiales. Suponer a un comisario nombrado en esas condiciones sin la voluntad del ingenio, es una utopía. Y refiere episodios que ha podido apreciar ahí, de cómo se comporta esta policía de Jujuy en cuanto tiene que hacer y que ver su intervención con las reclamaciones de los trabajadores por jornales.

Y vamos a ver ahora, después del aspecto social, después de ese salario de que hablaba el señor diputado Simón Padrós, cuál es la situación misma de la industria.

«La Revista de Ingeniería», órgano del Centro de Graduados y Profesionales Ingenieros de Tucumán, tiene una colaboración muy importante del ingeniero Alejandro S. Alvarez, llama-



da «Aporte a la solución del conflicto cañero-fabril». En un estudio hecho con datos oficiales de ingenios de Tucumán, llega a estas conclusiones: «El ingenio «La Florida» obtiene una extracción de sacarosa de más de 93 grados. El ingenio «Santa Ana» consigne casi todos los años una eficiencia de fabricación mayor de 99,5%; quiere decir, entonces, que si todos los ingenios pusieran sus secciones de molienda a la altura del ingenio «La Florida» y perfeccionaran los procesos y las instalaciones de fabricación hasta colocarlos en condiciones semejantes al ingenio «Santa Ana», la industria azucarera, con el mismo gasto actual, habrá ganado 20.583.098 kilos de azúcar, o en su defecto, si hubiera obtenido la misma producción actual moliendo kilos 261.372.670 de caña menos.»

Pero es evidente que eso no puede ser si uno se informa de la situación de los ingenios de la provincia de Tucumán y en especial el ingenio «Aguilares», del que es dueño el señor diputado don Simón Padrós. Construido para moler 250, muele 850. Toda la caña pasa por el guinche para entrar al trapiche. No hay cinta transportadora mecánica. El jugo sale tan mal que se sacaba el bagazo de la canaleta con rastrillo. Al ingenio le falta presión en las calderas y le sobra bagazo, que se amontona por todas partes. Han sido amortizado varias veces.

Sr. Simón Padrós. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Pena. — No, señor diputado.

Sr. Simón Padrós. — La teme.

Sr. Pena. — No, señor diputado, no temo nada, no todo lo que podía temer, si me ha pasado el miedo.

Sr. Simón Padrós. — La teme; si no, permítamela.

Sr. Repetto (N.). — Están haciendo su elogio técnico.

Sr. Simón Padrós. — Si me permite la interrupción, le voy a aclarar, diciéndole que si el ingenio ha obtenido el séptimo lugar del rendimiento, que ha llegado a 9,20, debe ser una patraña burda todo lo que acaba de decir.

Sr. Pena. — ¿Cuánto ganó? ¿A que no lo dice?

Sr. Simón Padrós. — ¡Ah! ¿Ese es el objeto del asunto? ¿Esó es lo que le preocupa? Debo haber ganado muy poco con esa preparación técnica.

Sr. Pena. — Basta de negocios.

El mismo señor ingeniero Alvarez, que toma como elemento de su trabajo el rendimiento posible de la cosecha del 31 y denuncia la pérdida de 20.000 toneladas de sacarosa y de 261.000 toneladas de caña plantada en Tucumán inútilmente, por haberse perdido el aprovechamiento por deficiencia técnica de los ingenios, denuncia otro hecho que es más grave. Habla del laudo arbitral que hizo el presidente Alvarez y que fué motivo para que no se produjera una interpelación pública en este recinto, por el diputado que habla, en aquella oportunidad. Dice el laudo arbitral en uno de sus capítulos, refiriéndose a la calidad mínima que debe tener la caña para ser apta para la fabricación de azúcar: «El jugo de la misma, procedente del grupo desfibrador y primer trapiche, no podrá tener una pureza aparente inferior a 71 grados», y agrega el ingeniero Alvarez: «oficializar la pureza 71 como mínimo para la calidad de la caña, es oficializar la indolencia, la despreocupación y fomentar el abandono de los cañaverales». De modo que el estado social de esa industria y su técnica están muy lejos de compensar, después de tantos años, el sacrificio que hemos venido soportando. Y ahora, lo más grave es que ha organizado todo el plan industrial por obra de los gobiernos de aquella provincia y de los gobiernos de la Legislatura en un sistema totalmente inverso al de la ley; porque la ley quiso proteger el desarrollo de la industria, pero tenía la preocupación de estimular también en parte el consumo del azúcar. No pudo estar en la inteligencia de los autores de esta ley, que ella fuera a terminar en un monopolio total, absoluto y completo de los industriales, que como son los que dan el dinero al gobierno para sus gastos fiscales, acaban por imponerle la ley cuando

do no so., ellos mismos gobernantes que la hacen, monopolio que mantiene a esa industria en un estado total de atraso técnico, en el que rige la ley de la técnica más regresiva y más bárbara. Todo está organizado para que ganen dinero los ingenios peor dotados.

Lo que se dice de la industria azucarera y de su bancarrota, tiene un valor relativo. Tengo en la mano algunos balances de las compañías azucareras, todos los que puedo tener del Boletín Oficial argentino. Leeré algunos balances al 31 de Marzo de 1934: Ledesma Sugar Company Limited — una argentina — ha ganado 1.887.738,94 pesos; la Compañía Azucarera Bella Vista, Manuel García Fernández Limitada, ha ganado 497.576,49 pesos; el ingenio azucarero Cruz Alta, ha ganado 400.589,34 pesos; la Compañía San Pablo de Fabricación de Azúcar, ha ganado 363.188,63; y la Compañía Azucarera Villa Quinteros, ha perdido plata y aparece firmando un director J. Simón Padrós.

Quiere decir que la situación de la industria azucarera no es una situación igual para todas las actividades que en ella están comprometidas.

Para dar una idea todavía más real del estado de atraso de esa industria, reiteraré, porque tiene importancia por la autoridad de la persona que insiste en hacer esas denuncias, la opinión del doctor Cross, que ocupándose de la utilización de la melaza en una revista agrícola industrial de Tucumán, dice lo siguiente: «Habiendo visto que la melaza es un producto de tanto valor, en otros países, tenemos que llegar a la conclusión de que debiera ser posible darle otro destino en Tucumán, que es echarla a los ríos y arroyos con el fin no solamente de evitar la corrupción de las aguas, sino también de aprovechar su valor para el beneficio de la industria. Pues es interesante notar que a los precios reinantes en Norte América durante el año 1926, — año de precios muy bajos — el valor de la melaza tirada a los ríos, en Tucumán, alcanza a la respetable suma de alrededor de dos millones de pesos.

Es decir, que se tiran al agua 2.000.000 de pesos o más por año, y esta es la causa del envenenamiento del ganado de Santiago del Estero, lo que motiva las reiteradas reclamaciones de esa provincia ante la de Tucumán.

Ya dije anteriormente que en alguna parte, el azúcar ha pasado a la categoría de subproducto, porque se ha estado desarrollando últimamente en algunos países una enorme variedad de aplicaciones de la caña, como el celotex, que ha llevado a esa industria por caminos que aquí sólo son conocidos por lecturas, sin haberse realizado ningún esfuerzo serio a ese respecto.

Esto proyecto, si bien con un propósito plausible como lo indicó ayer el señor diputado Martínez, al hacer la observación de que se incluía la disposición con el único objeto de evitar que si las provincias cobran alguna suma por este concepto no queden ellas con el dinero, sino que lo ingresen como parte integrante del fondo común de esta institución, contiene en esa disposición un algo que agrava la situación en favor de la industria azucarera. Todos saben que la ley de monopolio del azúcar ha sido demandada ante la Suprema Corte por la Compañía Azucarera de Concepción, porque viola los principios más elementales de la Constitución nacional. Sin que la Corte se haya pronunciado, el despacho dice, en su artículo 26, párrafo 3º, que «las provincias mantienen asimismo el derecho que les asiste a regular con propósitos económicos y sociales la producción, expendio o venta de cualquier producto y a imponer el pago de sumas de dinero para hacer efectivas sus disposiciones a los que las contravenigan o excedan los límites señalados». Y viene la disposición a que yo me refería, que ayer explicaba el señor diputado Martínez: «Los fondos que por esa causa se recauden ingresarán a la cuenta Impuestos Internos Nacionales».

Pediría al señor presidente hiciera guardar un poco de silencio a los señores diputados que conversan, pues me obligan a levantar la voz.

Sr. Presidente (Ferreira). — Ruego a los señores diputados guarden silencio, para que pueda ser oído el orador.

Sr. Pena. — En todo caso, podríamos pasar a cuarto intermedio.

Sr. Repetto (N.). — Hay diputados que conversan en el recinto como si estuvieran en la plaza del Congreso. Confunden el Congreso con la plaza del Congreso.

Sr. Presidente (Ferreira). — La Presidencia ya ha solicitado a los señores diputados que guarden la atención debida.

Sr. Corominas Segura. — Es evidente que la falta de atención corresponde también a la falta reglamentaria que comete el señor diputado, que está haciendo una extensa exposición sobre asuntos que nada tienen que ver con la unificación de los impuestos internos.

Sr. Pena. — Estoy contestando exposiciones anteriores.

Sr. Presidente (Ferreira). — La Presidencia advierte al señor diputado que debe mantenerse dentro del asunto.

Sr. Corominas Segura. — Al señor diputado Pena es preferible no oírlo, para que la Cámara delibere tranquilamente.

Sr. Pérez Leirós. — Esa es una irreverencia del señor diputado. No tiene derecho a decir eso.

Sr. Bruchou. — Irreverencia es hablar de asuntos que no están en debate.

Sr. Repetto (N.). — Que interesan a muchos diputados. Hay un grupo de diputados que desea escuchar.

Sr. Bruchou. — Si les interesa, que les dé una conferencia en su bloque, pero que no haga perder tiempo a la Cámara.

Sr. Oddone. — El señor diputado Pena está contestando argumentos hechos ayer.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Repetto (N.). — El diputado que no tenga interés en la exposición, tiene derecho a retirarse, pero no a molestar.

Sr. Bruchou. — Tenemos el derecho...

—Suena nuevamente la campana.

Sr. Presidente (Ferreira). — Continúa con la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Pena. — Yo me refiero a lo que fue se ha debatido, y si no es eso lo que está en debate, habrá estado de más el 86 % de los discursos. . .

Sr. Bruchou. — Estamos de acuerdo.

Sr. Pena. — . . como estaba de más que hablara tanto el señor diputado en el asunto de La Saladeril.

Sr. Bruchou. — No es la misma situación. No traiga a colación asuntos que pueden producirle disgustos.

Sr. Pena. — ¿A mí?

Sr. Bruchou. — Sí, señor; que pueden producirle disgustos.

—Suena la campana de orden.

Sr. Bruchou. — El asunto a que se refiere el señor diputado estaba en debate.

Sr. Presidente (Ferreira). — Continúa con la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Pena. — Bien, señor presidente; esta disposición tiene, a mi juicio, esa gravedad extrema. Anticipa una solución sobre un asunto pendiente de consideración de la justicia. La demanda de la Compañía Concepción, que he leído, así como la réplica presentada en nombre de la provincia de Tucumán por el doctor Pedro León Zavalía, me han llevado a la conclusión de que es una demanda que la justicia debe atender y resolver en contra de esa ley, porque no puede admitirse, en modo alguno, como concepto de justicia social, la organización de intereses de gremios que se imponen localmente y que luego exceden los límites de la provincia donde actúan y tratan de imponer y consiguen imponer a la Nación sacrificios ingentes, después de los años en que los ha venido soportando en obsequio de esos intereses locales. Y esa ley consagra esa enormidad, anticipándose a la decisión de la justicia.

¿Cómo se va a resolver este asunto? El azúcar importado y el azúcar nacional pagarán impuesto interno, pero ya verán los señores diputados que aquí no es exacto el axioma fundamental de que el orden de los sumandos no altera la suma. Aquí fracasa ese axioma tan conocido, que durante siglos no ha sufrido ninguna contradicción. Ahora, se contradice ese axioma por el despacho de la comisión.

¿Cuándo SC van a poner los dos centavos? Eso es lo que interesa saber. ¿Se va a reducir el impuesto del decreto del Gobierno Provisional en la proporción en que corresponda, o se pondrán después los dos centavos? Alterando el orden de los sumandos, so va a modificar el resultado: si se van a poner después los dos centavos, SC va a aumentar a 0,88 oro, que es el equivalente en oro del derecho del decreto a que me refiero. Ahí está todo el secreto del asunto: si SC pone antes o después. Inbría que aclarar el despacho en la parte pertinente: que pagarán en la aduana, donde serán considerados como gasto inherentes al despacho directo.

Repito que esa es toda la cuestión: si los dos centavos reducen el margen, no incidirán en el aumento de precio, pero si no se tienen en cuenta y se agregan después, van a incidir.

Conviene que haya aquí más claridad. Los industriales operan con esta ley, como operan los comerciantes con un catálogo de precios. La ley pasa a ser una especie de catálogo de precios de la industria. No es la regulación de las relaciones múltiples de los intereses de los ciudadanos para que haya para todos igualdad ante la ley, sino la organización en la ley de un conjunto de disposiciones que terminan por poner en ella el precio y que manejan los industriales como si fuera un catálogo de su negocio.

Todo el mundo sabe que a los industriales les conviene vender menos azúcar a un precio determinado, que aumentar sus ventas a un precio menor, porque la ganancia es más reducida en este caso. Así, por ejemplo, si se venden 200.000 toneladas a 40 centavos, los

industriales obtendrán 80.000.000 de pesos, y si esas 200.000 toneladas les cuestan 18 centavos gastarán 36 millones, y ganarán, por tanto, 44 millones de pesos. Si desarrollaran la técnica y vendiesen a 30 centavos 300.000 toneladas, obtendrían 90.000.000 de pesos. Si al mismo tiempo pudieran disminuir el costo a 16 centavos, les costará 48.000.000 y perderían de ganar 2 millones de pesos. Tal es la ley de los precios en los monopolios. Cuando hay una ley que tiene esta característica de fijar el precio, entonces se hace la operación de regular la cantidad para hacer lo que conviene. Esto lo hacen los industriales ahora con la ley argentina, que les permite, no ya realizar el comercio y la industria dentro de los cánones clásicos conocidos de regular el precio de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, sino de regular la oferta y la demanda de acuerdo con la conveniencia de sus intereses, que resulta de un precio establecido por ley. Es un sistema tan inadmisible de organización económica, que hasta ser enunciado para comprender que no puede dejarse que eso siga y menos agravarlo con la unificación y con las disposiciones impugnadas que afectan tanto al despacho de la comisión.

No he deseado perturbar el desarrollo de este debate sino plantear las cuestiones que a mi juicio y desde mi punto de vista revisten interés, señalando cuáles son los aspectos fundamentales que nos preocupan.

He dicho ayer que los impuestos internos, por esta unificación, van a obtener la derogación de leyes en toda la República; una en Buenos Aires, dos en Santa Fe, dos en Córdoba, cinco en Entre Ríos, veintidós en Tucumán, seis en Salta, dieciséis en Santiago, otras veintidós en Mendoza, una en Corrientes, dos en San Luis, nueve en San Juan, cinco en La Rioja, y una en Catamarca.

Como ven los señores diputados, las leyes que se van a derogar son a razón de veintidós en cada una de las provincias de Tucumán y de Mendoza, para las cuales el despacho a sancionarse

tiene importancia principal, porque persigue la posibilidad con una reducción sucesiva de impuestos, de obtener algún aumento del consumo que suponga el aumento de las utilidades de los industriales, que no bajarán el precio.

Ayer di algunas cifras y creo que tiene interés conocer el desarrollo, en globo, de la financiación total de esta obligación que va a contraer la Nación en cuanto va a distribuir en las provincias, por este convenio, la suma de 1.815 millones. El dato ha sido calculado año por año, con todo el desarrollo, pues en los cuadros publicados en el Diario de Sesiones sólo están enunciados año por año.

Hay en este despacho algunas cosas que han sido introducidas por nuestra iniciativa. Los impuestos internos gravan principalmente los malos consumos, y no hemos querido aceptar que esto ni pueda ser una ley contrato que limite el derecho de los municipios ni de las provincias, ni llevar adelante la obra necesaria en defensa de la salud de sus habitantes.

Nos hemos preocupado también de que esas sumas cuantiosas de dinero que se van a repartir a las provincias, tengan una aplicación más útil que la que suponemos y podemos adelantar que tendrán, de acuerdo a la experiencia tradicional conocerla. Por eso hemos propuesto que el 50 % de las mayores entradas se destine al desarrollo de la instrucción primaria, y que las provincias retomén alguna preocupación por ese problema de la instrucción primaria, que las mismas han abandonado y entregado a la Nación.

-Ocupa la Presidencia, el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Roberto J. Noble.

De manera que haciendo incorporar esa planilla al Diario de Sesiones (1) y dejando para proponer en particular, para cuando llegue el momento oportuno, la aclaración que conceptúo indis-

pensable de que esta ley de unificación de impuestos a los consumos, que se ha presentado como una desgravación a los consumos, no sea una ley que tenga una consecuencia inversa. Dejo con estas palabras explicada la razón de mi participación en este debate y agradezco a los señores diputados que hayan comprendido que era indispensable no cortar una exposición que, como han podido apreciar, no estaba destinada a perturbar el debate ni a alargarlo, sino a expresar un punto de vista perfectamente legítimo, en defensa de los intereses políticos que tenemos confiados por el pueblo de la Capital.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos*).

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho de la comisión.

—Después de unos momentos de espera para formar quórum :

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se va a votar el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Está en discusión en particular.

Sr. Martínez. — Hago indicación de que artículo que no se observe se dé por aprobado.

Sr. Ghioldi. — Podría omitirse la lectura de los cuadros.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Habiendo asentimiento, se procederá en la forma indicada por los señores diputados.

- Sin observación, se da por aprobado el artículo 1º.

—En discusión el artículo 2º.

Sr. Arce. — Pido la palabra.

Entiendo que la comisión había aceptado una sugestión que hice ayer y

(1) Véase pág. 495.

que me ha pasado desapercibida al aprobarse el artículo 1º.

Me refiero a cuando en él se habla de «impuestos internos nacionales». Si se uniforman los impuestos internos nacionales y provinciales y si por una ley de la Nación, que va a ser ley convenio, no habrá sino impuestos internos, está de más hablar de impuestos internos nacionales.

En el deseo de que la ley esté ligeramente mejor redactada — no quiero jactarme demasiado — rogaría que la comisión manifestara si acepta esa sugerión, a efecto de que se suprima de todos los artículos la palabra «nacionales» cuando se habla de impuestos internos.

Sr. Martínez. — Pido la palabra.

Nosotros agradecemos la colaboración del señor diputado por Buenos Aires, pero no creemos que en una ley de esta trascendencia tenga alguna importancia que la palabra «nacionales» figure después de «impuestos internos». La comisión ha redactado con bastante cuidado la ley y ha dado la definición de «impuestos internos nacionales» para caracterizarlos mejor y para que se sepa a qué impuestos se hace referencia.

Es evidente que una vez aprobada la ley y adheridas las provincias, estos impuestos internos al consumo serán los únicos que se van a distribuir, pero no es menester que el texto de la ley sea cambiado y debe quedar tal cual está redactado el despacho.

Después de la sanción, esta ley — salvo que algunas provincias no se adhieran y mantengan sus impuestos internos — ya no habrá más que impuestos internos nacionales al consumo y estos son por lo tanto los únicos que se repartirán, pues los provinciales, si los hubiera en alguna provincia no adherida, no pueden ser como es lógico objeto de distribución.

Sr. Arce. — Pido la palabra.

Yo voy a insistir, señor presidente, porque el miembro informante me obliga a ello.

El encabezamiento de este despacho pertenece también a la comisión y en

él se habla «del proyecto de ley del señor diputado Escobar sobre unificación de impuestos internos y participación correspondiente de la Nación y las provincias;,, con una propiedad, una exactitud y una justeza que demuestran que la comisión ha redactado con cuidado esa parte. En cambio, toma otra orientación y redacta con menos cuidado, en mi sentir, cuando en el artículo 1º habla de impuestos internos nacionales, como incitando, a pesar de la unificación, a las provincias a que pongan impuestos internos provinciales.

Por esa razón insisto en que se suprima esa palabra, porque la ley debe ser redactada con claridad y en la mejor forma posible.

Sr. Martínez. — Pido la palabra.

Parece increíble que se haya discutido dos días en general esta ley, para tener que volver ahora sobre puntos que debían haber advertido ya los señores diputados.

Esta es una ley convenio, que no cercena las facultades de las provincias y que parte justamente de la base de estas facultades; ley a la que adherirán éstas, en primer lugar, porque han manifestado su voluntad de hacerlo cuando fueron consultadas, y, en segundo lugar, por las ventajas financieras y económicas que les ofrece la unificación.

Respetando la doctrina constitucional y la exégesis de la Corte Suprema, esta ley no cercena el derecho de las provincias de establecer impuestos internos al consumo; pero una vez que las provincias se acojan a la ley, cesará este derecho de establecer impuestos internos, por la propia voluntad de ellas; lo mismo que cuando un Estado soberano al celebrar un tratado con otra potencia, puede convenir en disminuir, aumentar o consolidar tal o cual derecho aduanero o de cualquier otro orden.

La comisión, colocándose en la hipótesis, que será imposible en la práctica, de que alguna provincia no se incorporase a este régimen, no puede referirse concretamente sino a la materia sobre la que puede legislar. Por

eso la comisión no acepta el concurso del señor diputado por la provincia de Buenos Aires, que no perfecciona en este punto su despacho.

Sr. Coca. — Pido la palabra.

Cuando se discutió en general este proyecto, no quedó aclarado, porque ningún señor diputado se ha referido a ella, cual será la función de las provincias que no adhieran a esta ley. . .

Sr. Godoy. — Pero ya se ha votado el artículo 1°.

Sr. Arce. — La observación se refiere a todos y cada uno de ellos. NO vamos a hacer la teoría. . .

Sr. Coca. — Señor diputado Arce : no tiene la palabra.

Con las manifestaciones del señor diputado Arce y del señor presidente de la Comisión de Presupuesto, se viene aclarando la situación de las provincias que no adhieran a esta ley, punto importante, porque puede hacer fracasar toda su economía, y quedó confuso en el debate en general. Por eso, creo que está muy bien que se hable de impuestos internos nacionales, porque es probable que, no sólo las provincias que no adhieran, sino también algunas de las provincias adheridas, sancionen en el futuro gravámenes de carácter interno, como se llama a algunas leyes impositivas y que tendrán carácter provincial, y así las encontraremos, así las estudiaremos, y así tendremos que considerarlas.

Por eso debe existir en la ley esta calificación de impuestos internos «nacionales», porque con toda seguridad alguna vez los habrá provinciales, aun en las provincias que adhieran a la ley cuyo proyecto se discute.

Sr. Martínez. — Permítame el señor diputado una aclaración que conviene que quede expresamente consignada : si alguna provincia adherida al régimen estableciera impuestos internos, de acuerdo con esta ley y con la adhesión de esa provincia, serían nulos dichos impuestos.

Sr. Coca. — El proyecto enumera las leyes de impuestos internos provinciales, que quedarán derogadas por esta sanción. . .

Sr. Martínez. — Es exacto lo que dice el señor diputado, pero esa enumeración es sólo enunciativa. No quiere decir que otras leyes no deban derogarse, siempre que esas leyes sean del mismo contenido y espíritu que las que expresamente se derogan. Va por vía de ejemplo.

Sr. Ghioldi. — Lo aclara el artículo 19, en su inciso e).

Sr. Martínez. — Exactamente; he querido contestar al señor diputado Coca para que no haya duda al respecto.

Sr. Dickmann (A.). — Conviene dejar bien aclarado, ya que de dudas se trata, que si alguna provincia no adhiera a esta ley, lo votado y las tasas nacionales regirán también esa provincia,

Sr. Martínez. — Así es; por eso es Ley nacional y por eso son impuestos internos nacionales.

Sr. Ahumada. — Pido la palabra.

No suscribo totalmente las palabras que acaba de pronunciar el señor presidente de la comisión. Creo, como él, que debe mantenerse la expresión de impuestos internos nacionales, porque las provincias, en virtud de esta ley, tendrán derecho a participar en el producido de esos impuestos internos, que serán en lo sucesivo exclusivamente nacionales. Pero no estoy conforme con el concepto expresado, en cuanto al alcance de esta ley contrato. No creo que en virtud de ella las provincias pierdan, de aquí en adelante, en absoluto el derecho de establecer todos y cualquiera clase de impuestos internos. Pierden el derecho de establecer impuestos internos de estos que se unifican por ley, y todos aquellos que quedan comprendidos o afectados en las prohibiciones y restricciones que en el texto figuran; pero aquellos otros impuestos internos que la fértil imaginación de los legisladores de provincia puedan hacer surgir en lo sucesivo y que no resulten prohibidos por esta ley ni comprendidos por la unificación, podrán ser legítimamente establecidos en las provincias. Con ese criterio he de votar.

Quería hacer esta salvedad, porque **I n** considero de suma importancia.

**Sr. Martínez.** — Pido la palabra.

Reputo en cierto m o d o innecesaria **I n** aclaración que hace e l señor diputado por Catamarca, porque l a discusión promovida se refiere a impuestos internos al consumo y es evidente, e n t o n c e s , que aceptada por l a s provincias esta ley, ellas voluntariamente se cercenan c l derecho que tienen ahora de poner tales impuestos provinciales al consumo. Ahora, su facultad de poner impuestos sobre otros objetos 0 personas n o está en este momento en tela de juicio ni es materia sobre que legisla el proyecto que está a consideración de esta Cámara.

**Sr. Arce.** — Pido la palabra.

Lamento tener que insistir, precisamente por la uniformidad con que parece que los distintos sectores de **I n** Cámara entienden que debe mantenerse el calificativo de «nacional». No es la primera vez que la Cámara l i a v o l a d o en contra, reconociendo q u e la observación que s c hacía por algún diputado era perfectamente razonable. Alguna vez puede ser que s c produzca a la inversa : sería mucho peor, es decir, que se reconozca que no se tenga razón y que se vote en favor.

La exégesis constitucional a que se ha referido el señor diputado por Córdoba determina q u e la Nación puede imponer al consumo y las provincias también, y la exégesis constitucional determina que cuando se dicta una ley por c l Congreso de la Nación e s una ley nacional y las provincias no pueden imponer por cuenta de las provincias, de la misma manera como las provincias no pueden imponer por cuenta de la N a c i ó n . En una ley de la Nación sobre impuestos internos al consumo sobra el calificativo «nacional». El calificativo procede de la ley : el impuesto es nacional porque l o sanciona e l Congreso de la Nación. No insisto porque esto es tan claro como la misma claridad y votaré en contra t i c esa palabra.

**S r . Martínez.** — No hay por qué hacer un drama por 111121 palabra.

**Sr. Arce.** — El que lo hace es el presidente de **I n** Comisión de Presupuesto.

**Sr. Martínez.** — Yo no 'he impugnado el despacho.

**Sr. Arce.** — Al mantenerlo.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Se va a votar e l artículo 2º del despacho de la comisión.

— Resulta aprobado

— En consideración e l artículo 3º.

**S r . Graffigna.** — Pido l a palabra para referirme al m o n t o del promedio básico que l e corresponde a la provincia de San Juan.

**Sr. Ghioldi.** — Estamos en el artículo 3º no en el 2º.

**Sr. Graffigna.** — He entendido q u e se ha votado la inclusión de **I n** palabra «nacional» en el artículo 2º.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Lo q u e se ha votado, señor diputado, es el artículo 2º del despacho. Si el señor diputado hace moción de reconsideración.

**Sr. Graffigna.** — Sí, señor presidente: formulo esa moción.

**Sr. Presidente (Noble FL. J.).** — Se va a v o l a r la moción de reconsideración del artículo 2º, formulada p o r e l señor diputado p o r S a n Juan. Se requieren dos tercios.

— Resulta negativa.

**Sr. Coromines Segura.** — Pido que se rectifique la votación.

**Sr. Presidente (Noble R. Cr.).** — Se va a rectificar la votación.

— Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

**Sr. Graffigna.** — No quisiera que la relativa pequeñez y el poco significado aparente de la moción que voy a formular a la Honorable Cámara viniera a perturbar y n i siquiera a empañar la grandeza de los propósitos que la ley



persigue y la pureza de los conceptos de patriótica economía que se han vertido en esta Cámara en abono de su pronta sanción, sanción que consagraría la unidad económica y consolidaría la unidad política del país, dentro del juego de las actuales instituciones sin rozarlas en su integridad originaria. Los medulosos y elocuentes discursos de mis colegas y de nuestro estudioso e inteligente ministro de Hacienda doctor Pinedo, que contrastan con las falacias y los sofismas del sector minoritario, han inclinado decididamente las voluntades a favor de su sanción.

No trepido en afirmar, después de esta votación en general, que el Parlamento acaba de dar un gran paso en materia tributaria al conformar orgánicamente mediante la unificación el régimen de los impuestos internos, cuyo estado actual empezaba a socavar las bases económicas y sociales del país. Mi enhorabuena, pues, al autor principal de esta iniciativa, doctor Pinedo; las proyecciones de su personalidad pasarán seguramente a la historia y a la posteridad como un alto ejemplo de ciencia y de Valiente patriotismo bien entendido.

La justicia que asiste a la solicitud que voy a formular a mi Honorable Cámara, me da el valor suficiente para afrontar los inconvenientes derivados, como dije antes, de la aparente pequeñez del pedido que voy a hacer.

El proyecto originario del Poder Ejecutivo determinaba que la cifra básica se debía obtener con el promedio de la recaudación de los dos últimos años, pero la Comisión de Presupuesto atendiendo justicieras reclamaciones de las provincias, resolvió hacer este promedio en base de los últimos cinco años, porque entendió que se obtendría uno más justo y equitativo, que sería la expresión real de lo recaudado en épocas normales y regulares, con el fin de que los Estados provinciales no vieran cercenadas sus rentas y, en consecuencia, entorpecida su gestión administrativa.

Todas las provincias hallan acatado este criterio porque han obtenido un promedio justo y beneficioso para sus

rentas, pero San Juan constituye la excepción: es la única provincia que sale perjudicada en cantidades ponderables. Teniendo más población y más significación económica que Jujuy, San Luis y tal vez que Salta, le corresponde en la compensación por consumo un promedio inferior en más de la mitad sobre la que menos recibe de las provincias nombradas, o sea casi igual a la provincia de La Rioja.

Esto se ha producido debido a que han entrado a gravitar en el promedio tres años de intervenciones federales, tres años de recaudación irregular, porque los contribuyentes se acogían a los beneficios del artículo 70 de la Constitución provincial, que en forma desorbitada e inconsulta sancionó la convención cantonista de 1937. Esa cláusula constitucional dice que, en caso de intervención federal, ningún impuesto podrá cobrarse coercitivamente, quedando suspendidos los efectos ejecutivos y de premio para su cobro desde el día de la caducidad de las autoridades locales. Esa cláusula constitucional significa, pues, que la recaudación durante la época de las intervenciones ha quedado librada a la buena o mala voluntad de los contribuyentes.

Esa fué la causa primordial de las Callas recaudatorias de los años 1929, 1930 y 1931. Tengo sobre mi pupitre la planilla donde se notan las caídas de las cifras durante las épocas de intervención. Así, de 405.000 baja a 107.000, cifra ésta que se mantiene más o menos durante los años 1929, 1930 y 1931, volviendo a subir luego en los años 1932 y 1933, o sea durante los gobiernos regulares.

No obstante estas fallas, las intervenciones pudieron llenar su cometido administrativo porque la índole misma de su función transitoria y accidental les obligaba a hacer grandes economías. La supresión de los gastos legislativos, la suspensión de toda obra pública y de los gastos de conservación de muchas de ellas, las economías en los gastos policiales, porque las funciones policiales eran cumplidas por ofi-

ciales del ejército, la suspensión temporaria del funcionamiento de algunas reparticiones públicas permitieron a las intervenciones prescindir de muchos gastos que a un gobierno constitucional y regular les son imprescindibles y la virtud de disposiciones legales y constitucionales.

San Juan, señor presidente, no puede equipararse a La Rioja, ni por el monto de su aporte a los fondos de esta ley ni por el número de sus habitantes. El promedio que le asigna el despacho de la Comisión de Presupuesto está muy lejos, pues, de ser la expresión real de su recaudación regular y normal.

Tampoco puede aducirse que los impuestos al consumo han sido en San Juan excesivamente altos. No han tenido el carácter de extorsivos y confiscatorios, como las que han gravitado sobre la producción. Por eso no haré esta misma cuestión cuando se trate el artículo 6º, en 1º que respecta a la compensación que debe recibir San Juan en concepto de provincia productora, porque no cometería la torpeza de abogar por las exacciones que impuso Cantóni, la hago aquí, porque se trata de compensación por concepto de impuestos al consumo.

No es posible que San Juan acepte sin reclamar, la asignación de una cifra a promedial inferior a la recaudación del año 1924, diez años atrás. Esto indica claramente que ha habido factores perturbadores de la recaudación, y esos factores no han sido otros que los que acabo de poner en evidencia. En virtud, pues, de excepcional situación que ha atravesado

en esta última década, durante la cual ha sido allanada su autonomía cinco veces, pido a la Honorable Cámara una excepción, en el sentido de que se le conceda obtener un promedio tomando como base la recaudación de los últimos 5 años de gobierno constitucional. Se hará a sí un acto de justicia que aumentará, el promedio básico en 111.000 pesos solamente, sobre la cifra fijada por el despacho de la co-

misión, que es de 195.000. La aplicación de este criterio daría para San Juan una cifra promedial de 306.000 pesos, muy inferior siempre, señores diputados, a la que les corresponde a las provincias de San Luis y de Jujuy que, como dije, . .

—Suena la campanilla que anuncia la terminación del plazo reglamentario para el uso de la palabra.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Ha vencido el término reglamentario. La Cámara resolverá, por votación, si se prorrogue ese término al señor diputado.

—Se vota, y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Continúa con la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Graffigna. — Decía, señor presidente, que la cifra para San Juan, con la modificación que he propuesto, sería inferior a la de las provincias de San Luis y de Jujuy, que, como dije, tienen mucho menos población y significación económica que San Juan.

Esa cantidad, mencionada en este recinto, donde estamos acostumbrados a las cifras siderales, parece pequeña y tal vez disminuye el significado de mi moción, al parecer encaminada a entorpecer la sanción de esta ley y que no trepido en calificar de magistral e impostergable en este momento de economía relajada y de valores deprimidos; parece pequeña, pero para San Juan significa mucho dentro de su presupuesto, si se considera el estado de postración en que ha quedado esa provincia como consecuencia de la exacción y del despilfarro sin precedente que han significado los gobiernos del cantonismo y que aun hoy están gravitando en forma de deuda flotante y de incontables pleitos que la Suprema Corte se ve compelida a fallar indefectiblemente en contra de la provincia. San Juan, lejos de recibir un aumento en sus rentas por consumo en relación a la recaudación de los úl-

timos años, vería disminuída su renta aun en el caso de que se sancionara 1 0 que solicito.

Tiene suma importancia para San Juan la cifra promedial, porque es la base de la escala ascendente de las cantidades que en el futuro serán entregadas a la provincia y que compensará las disminuciones anuales de la escala descendente de los aportes por concepto de producción.

Entiendo que la Cámara no puede negar a San Juan lo que la Comisión de Presupuesto y Hacienda ha concedido a otras provincias en base de razones mucho menos convincentes.

Concretando, señor presidente : para que se someta mi moción a rotación, pido a la Honorable Cámara que se establezca para la provincia de San Juan un promedio básico tomando como punto de partida las recaudaciones por concepto de impuesto al consumo correspondientes a los últimos cinco años de gobierno constitucional.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Martínez. — Pido la palabra.

No he podido consultar a los miembros de la comisión sobre la proposición del señor diputado por San Juan, pero personalmente me inclino a no acceder a la misma.

Para redactar este proyecto de ley se ha tenido que partir de determinadas bases. Ya se ha explicado en el curso de la discusión en general cómo el Poder Ejecutivo y la comisión, adoptando un criterio realista, han desechado otros puntos de partida, como ser el índice provincial de consumos y ha tomado como base lo que realmente han recaudado las provincias, porque hubiera sido imposible lograr la ocultación de la unificación, si esta ley por ajustarse estrictamente hubiera acordado a las provincias un monto de recursos inferiores a los que en la actualidad disponen, y que le sirven para establecer sus presupuestos de gastos.

Hemos hecho notar también cómo dentro de este criterio, la primitiva base del Poder Ejecutivo, que fué el tomar la mejor recaudación de cada

provincia en los años 1932 y 1933, años de recaudación relativamente reducida como consecuencia de la crisis económica, fué reemplazada a iniciativa y solicitud de las provincias por el promedio de los últimos cinco años, que es muy superior a aquél y todavía ese promedio fué mejorado con un 10 % adicional.

También hice notar, señor presidente, en el informe a nombre de la comisión, cómo la única provincia que en realidad no iba a recibir por concepto de provincia consumidora mayor cantidad que la que actualmente percibía, era la provincia de San Juan. Pero no creo que merezca la pena modificar el despacho cuando esta provincia percibe en cambio como productora, por impuestos que han gravitado hasta ahora sobre el resto de la población argentina, en provecho sólo de la provincia en donde se elaboraban esos productos.

Si San Juan no tuviera por esta ley derecho a percibir ingresos que por la parte que dejaba de recibir por impuestos que hubieran sido percibidos sólo por el consumo, sería justo tal vez acceder al pedido de la diputación por San Juan. Pero como tendrá fuertes ingresos entregados por la Nación en compensación de los que dejara de recibir como provincia productora del vino, pues como ha soportado un régimen rentístico por tal concepto de altos impuestos, tributos que los ha pagado en definitiva todo el pueblo consumidor argentino, no creo que deba accederse a ello.

Por otra parte, quiero hacer presente que en la conferencia de ministros de Hacienda de la Nación y de las provincias, celebrada por mi iniciativa el 17 de Octubre, tal vez las palabras más calurosas de adhesión y de aplauso a este proyecto fueron las pronunciadas por el señor ministro de Hacienda de San Juan, doctor Horacio Videla, que si: registran en la página 13 del anexo correspondiente a la orden del día.

El señor ministro de San Juan decía : «El gobierno de San Juan presta su adhesión más decidida al proyecto de ley del señor ministro de Hacienda

de la Nación, proyecto que no necesita defensa porque yo entiendo que está propiciada y reconocida su bondad por la mayor parte de la opinión del país. Repito, entonces, que el gobierno de San Juan adhiere a P. I. aunque sí con algunas reservas, cuyo detalle paso a concretar. Las reservas se referían al distinto impuesto por la diferente graduación alcohólica y a otros detalles del régimen de la ley que no tenían nada que ver con el monto de los recursos que S. C. asignaba a la provincia.

Sr. Graffigna. — Eso opinaba el ministro de Hacienda de San Juan antes del despacho de la comisión, el cual cercenaba a mi provincia la suma que hoy reclama. Estaba, sí, muy de acuerdo con el proyecto originario del Poder Ejecutivo.

Sr. Dickmann (E.). — ¿Me permite una pregunta, señor diputado?

Entiendo que San Juan tenía un impuesto de 8 centavos por litro de vino. Ahora se crea un impuesto de 5 centavos.

Sr. Martínez. — Exactamente.

Sr. Dickmann (E.). — ... y San Juan va a seguir percibiendo, por la cuota que se le otorga, los 8 centavos. ¿Quién paga la diferencia? ¿De dónde sale?

Sr. Martínez. — Sale de donde salen todos los impuestos: del consumo del país; pero quiero completar la respuesta.

Aprecio la intención del señor diputado por la Capital.

La industria sanjuanina va a ser aliviada en gran parte de una carga tributaria muy pesada que soportaba, desde el momento que se reduce el impuesto en una proporción muy grande: de 8 a 5 centavos, o sea una rebaja del 40 %. Pero en cambio la provincia de San Juan percibirá un poco disminuida --- porque se ha tomado el promedio de los últimos 5 años en vez de los dos últimos años --- la cantidad de recursos necesaria para satisfacer el presupuesto, como si tal impuesto no se hubiera reducido siete millones y medio para 1935. Estos recursos antes

eran atendidos con los 8 centavos a que se refería el señor diputado por la Capital.

Sr. Oddone. — Seguirá percibiendo los 8 centavos.

Sr. Martínez. — Por vía indirecta.

Sr. Graffigna. -- La Nación, en virtud de esta ley, va a percibir 8.000.000 de pesos, porque cinco centavos por litro significan diez pesos por casco, y como el despacho normal de San Juan es de 800.000 cascos ingresarán 8.000.000 de pesos.

Sr. Alonso. — El error está en pensar que esos 8.000.000 de pesos se van a percibir de San Juan.

Sr. Dickmann (E.). — Del consumo nacional.

Sr. Graffigna. — El caso es que la provincia de San Juan está descapitalizándose en más de la mitad.

Sr. Martínez. — Pero no está descapitalizada por virtud de esta ley. Esta ley va, en cambio, a mejorar las finanzas y la economía de San Juan, y por eso nos parece que la guardan proporción las ventajas enormes que desde el punto de vista económico va a recibir la provincia, aunque más no sea por la libertad de circulación que van a tener sus productos, con este regateo de 100.000 pesos, más o menos, en las cifras que se le asignan como provincia consumidora, suma que por su pequeñez no puede gravitar en la estabilidad de su presupuesto.

Sr. Dickmann (A.). — Pido la palabra.

Me voy a referir a una indicación al orden del debate. El señor presidente interrogó al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, si ésta aceptaba la indicación formulada por el señor diputado por San Juan. Yo hago notar que, como la comisión está compuesta de 19 miembros, no será posible, en ningún caso, que ella se pronuncie regularmente sobre cualquier proposición que se improvise, en el recinto. De manera que, en tales condiciones, la proposición que se formule podrá votarse como agregado o como substitución, según corresponda.

Sr. Martínez. — So sé si el señor diputado oyó que dejé constancia de que yo emitía una opinión personal, justamente por las razones que él ha expuesto.

Sr. Dickmann (A.). — Precisamente; coincidimos.

Sr. Rcpetto (N.). — Pido la palabra.

Como se ha resuelto reconsiderar el artículo 2º, voy a aprovechar la oportunidad para salvar mi opinión y mi responsabilidad a su respecto. Seré sumamente breve, pero quiero hacer una observación que considero fundamental y que no me perdonaría nunca no haber formulado.

Esta ley se ha organizado en forma tal que obliga a la Nación a entregar a las provincias, en los años que ella determina, sumas determinadas de dinero. Yo pregunto: ¿Está segura la Nación de poder recaudar por concepto de impuestos internos nacionales todo lo que necesita para entregar a las provincias, las sumas que la ley fija? ¿Está segura la Nación de que podrá hacerlo?

Sólo comprendo, señores diputados, y me hago un deber en manifestarlo, que la unificación de impuestos que se va a adoptar implica indiscutiblemente un progreso que todo el mundo debe celebrar y aplaudir. Yo desearía que esta política que ahora se inicia fuera el comienzo de una evolución en la materia y que pudiéramos llegar pronto, no sólo a la unificación del cobro de los impuestos internos, sino que, mediante el mejoramiento de la técnica, entregáramos a la Nación la percepción de muchos otros impuestos que cobran las provincias y las municipalidades. La percepción de esos impuestos, puesta en manos de la Nación, seguramente se haría con ventajas y con economía, sin que ninguna provincia ni municipalidad resultaran perjudicadas en un solo centavo. Yo comprendo que unificándose el sistema de los impuestos, su percepción se va a realizar con una enorme economía y que ello dará un ancho margen para el cumplimiento de las obligaciones que

la Nación contrae por esta ley. Pero si no ocurriera así, si la percepción de estos impuestos fuera en escala descendente, si las perspectivas que por desgracia se ofrecen ahora en el país se acentuaran, si fueran un poco más sombrías y el rendimiento de estos impuestos se redujera, ¿cuál sería la situación de la Nación frente a estas obligaciones? La falla fundamental del proyecto reside en que la Nación se obliga a entregar a las provincias una cantidad determinada en un número de años.

Sr. Ministro de Hacienda. — Cincos.

Sr. Rcpetto (N.). — ... cuando habría correspondido hacer el ensayo encargándose la Nación de la recaudación, que habría podido organizarse perfectamente, y de distribuir lo recaudado dentro de cada división autónoma. La ley obliga a la Nación a desembolsos fijos y precisos, de cuya percepción no puede estar de antemano asegurada.

Sr. Ministro de Hacienda. — ¿Le sería útil al señor diputado que le expresara el cálculo hecho por el gobierno sobre la financiación de esta ley?

Sr. Rcpetto (N.). — ¿Cómo no!

Sr. Ministro de Hacienda. — Le puedo decir en simples guarismos — y no necesita controlar el señor diputado, porque puedo darle la planilla — lo que la Nación pierde o desembolsa. Distribución a las provincias por impuestos al consumo, 40,9 millones; por impuestos a la producción, 31,9; participación en réditos, 14; en ventas, 5,2; eso suma 92.000.000. Se pierde en impuestos a las transacciones, que elimina, 18.000.000. En total, son 110 millones que deja de percibir lo que entrega la Nación.

Del lado del activo: mayor recaudación del tabaco, 10.000.000; vinos, 25; azúcar, 7; cubiertas, 3; fósforos, 2; cerveza, 1,2; alcoholes, 5; ventas, 30. Todo esto son aumentos. Modificación en impuesto a los réditos, 3.000.000; sucesiones, 8.000.000. Total 94,2 millones.

Esto indica un desequilibrio de casi 15,8 millones que proviene en algo más

d e 6.000.000 del aumento en el reparto por la unificación, y en 8,25 millones del aumento en el reparto de los impuestos a los réditos y a las ventas. Lo hago notar para que se vean estas dos cosas, las cuales, por lo visto, no han cundido en la opinión: primero, que no queremos aumentar los impuestos nacionales: lo único que queremos es reponer lo que se suprime.

Sr. Dickmann (A.). — No se lo consigue.

Sr. Ministro de Hacienda. — Lo veremos después.

Y, segundo, que si se hubieran aprobado los proyectos tal cual vinieron del Ejecutivo, se habría conseguido íntegramente la cantidad que la Nación tenía que entregar. La obra del Congreso habrá producido un desequilibrio cuyo límite máximo sería de 14.000.000; el límite mínimo no sé cuál sería, porque depende del rendimiento del impuesto a las ventas, que no dará más de 30.000.000, sino con un margen de 1.000.000 ó 2.000.000 en más en el mejor de los casos.

Esa es la situación numérica del proyecto.

Ahora, si no molesto al señor diputado Repetto, le diré respecto a su observación.

Sr. Repetto (N.). — ¡Cómo no!

Sr. Ministro de Hacienda. — ... sobre las obligaciones fijas que lo mata sobre sí la Nación para con las provincias frente a su recaudación aleatoria, que es exacto, pero constituye el objeto de la ley y uno de los atractivos para que las provincias entren, sabiendo, que en estos conceptos percibirán cantidades fijas. La Nación espera no perder mucho, y como de aquí cinco años la Nación y las provincias se asocian y corren en el futuro igual suerte, tanto si la recaudación es mayor como si disminuye, no costará nunca la sanción de este proyecto y la unificación económica del país una suma enantiosa.

Sr. Palacio. — La observación del señor diputado Repetto parte de la base de que van a desaparecer los

consumos en las provincias y que no irá la Nación para crearles recursos.

Sr. Repetto (N.). — 'So me atribuya semejante idea, que no ha podido caber en mi cabeza. (Risas).

Agradezco al señor ministro los informes que me ha dado y que en parte confirman el temor que abrigo respecto del éxito de este impuesto. El señor ministro admite que nos iniciaremos en el primer año con un déficit de 15 millones, casi de 16, al mismo tiempo que nos expresa las mejores esperanzas para ciertos impuestos sobre cuyo rendimiento ya tendremos alguna noción concreta dentro de poco tiempo.

Yo no sé qué suerte va a correr el impuesto a las herencias, pero a juzgar por el fuego que ya ha iniciado contra él una buena parte de esa prensa vinculada a las clases adineradas, me imagino la suerte que correrá en esta Cámara. Por otra parte, no creo que podamos hacernos la ilusión de que el impuesto a las ventas dará 30.000.000 de pesos. Es un impuesto que será muy resistido. Hemos recibido una cantidad de comunicaciones procedentes de toda clase de organismos del comercio e industriales protestando contra ese impuesto.

Sr. Ministro de Hacienda. — Pero el señor diputado podrá admitir los fundamentos que tengo. Yo concibo la protesta de ese sector contra el impuesto a las ventas porque es un impuesto al consumo, pero no concibo, no justifico, no admito ni tolero esas protestas de los centros industriales y comerciales que no pagarán un centavo por tal impuesto.

Sr. Dickmann (E.). — Eso lo vamos a discutir, señor ministro.

Sr. Ministro de Hacienda. — ¡Yo comprendo la posición de ustedes.

Sr. Repetto (N.). — La lucha tenaz que se ha sostenido contra el impuesto a las transacciones, ha preparado ya fuerzas que están listas para entrar en un combate singular; esa lucha previa es la que dispone el terreno para la resistencia a este otro impuesto a las ventas, por el cual se quiere reemplazar al primero.

En cuanto a que el señor ministro considera que los industriales no tienen nada que decir contra este impuesto, francamente acabo de leer algunas comunicaciones de ciertos industriales de la alimentación, las cuales parecen demostrar que este impuesto también gravitará en cierto modo sobre ellos.

Quiero dejar constancia de mi opinión en el sentido de que esta es una ley que SC inicia con, una falla fundamental.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se va a votar el artículo 2º del despacho de la comisión.

—Resultado afirmativa.

6

#### DIAS DE SESION

Sr. Corominas Segura. — Pido In palabra.

Voy a formular una indicación respecto al trabajo de la Cámara.

He conversado con algunos miembros de los otros sectores y desearía proponer que la Cámara resuelva realizar sesiones diarias en la próxima semana, con excepción del día sábado, a fin de acelerar el trabajo.

Sr. Presidente (Noble H. J.). — En consideración la proposición formulada por el señor diputado por Mendoza.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa.

7

#### INDICACION

Sr. Dickmann (E.). — Pido la palabra para una pequeña observación.

La acústica de la Cámara ha empeorado considerablemente. No podemos continuar trabajando así. De modo que aun pecando contra la estética, pido que se reponga ese cortinado tan clásico y tan aretisco que adornaba el recinto, para que mejore un poco la acústica del mismo.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — No ha sido por razones de estética sino de temperatura que se han retirado. Se tomará nota de la indicación del señor diputado.

8

#### ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Noble R. J.). — El Poder Ejecutivo, Ira remitido un mensaje informando sobre las actuaciones de la Junta Reguladora de Granos, que se dará entrada.

#### III

Buenos Aires, 28 de Noviembre de 1934.

A la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Congreso Nacional.

Transcurrido un año de la creación de la Junta Reguladora de Granos, por los graves motivos que son del dominio público, cumplo con el deber de informar a vuestra honorabilidad acerca de su funcionamiento.

La junta fué creada para que los productores pudiesen recibir el incremento de precio correspondiente al mayor valor que se fijaba a las letras de exportación, de acuerdo con las medidas del 28 de Noviembre de 1933.

Antes de la junta, se pagaba \$ 15,34 por cada 100 francos a los exportadores de granos, y éstos, dados los precios del mercado internacional en esa época, no podían pagar más de \$ 4,80 por quintal de trigo.

Establecido el precio de \$ 18,36 para los 100 francos a raíz de las medidas referidas, la junta pudo fijar un precio básico de \$ 3,75 para el trigo en darsena, o sea, 26 % más 1,111: el precio anterior.

La junta mantuvo esa cotización durante todo el año transcurrido desde su creación, a pesar de haber tenido que vender el grano a los exportadores a un precio sensiblemente inferior en la mayor parte de ese tiempo.

Este fué precisamente el objeto primordial del mecanismo de emergencia; elevar los precios hasta un mínimo que evite el desastre inminente de la producción nacional, y mantener ese mínimo aun a costa de grandes pérdidas.

En resumen, los resultados de la Junta Reguladora de Granos según lo que acabo de exponer a vuestra honorabilidad han sido los siguientes:

- 1º El trigo se pagó a un promedio de \$ 5,63 por quintal en lugar de los \$ 4,21 que hubiera correspondido pagar de no haberse constituido la junta modificando la cotización de las divisas extranjeras por las medidas del 28 de Noviembre de 1933;
- 2º Esa diferencia de \$ 1,42 por quintal que también ha incidido sobre las ventas para el consumo interno constituye una cantidad adicional de 109.000.000 que los productores no hubiesen recibido si las divisas extranjeras se siguieran cotizando como antes;
- 3º El hecho de haberse tomado apenas 7.000.000 para la junta de granos de los 96.000.000 de ganancia de cambio (al 30 de Septiembre de 1934) es un resultado altamente satisfactorio para el país. Si las pérdidas del trigo hubieran sido mucho mayores como se había calculado antes de la sequía de Norte América, la junta hubiera podido necesitar cerca de 50.000.000 de estas ganancias de cambio;
- 4º El sobrante no utilizado de las ganancias de cambio constituye un fondo nacional de reserva para la producción. El mercado mundial plantea todavía una serie de incógnitas sobre su futuro. Hoy el país tiene lo que antes no tenía: los recursos para garantizar a su producción valores básicos.

El Poder Ejecutivo considera que los beneficios que no se utilicen por la junta deberán ser empleados en forma que beneficien directamente a los productores nacionales.

Las perspectivas que presenta la negociación de la próxima cosecha han aconsejado al Poder Ejecutivo mantener la junta por sí su funcionamiento pudiera nuevamente ser necesario.

En este sentido, en breve plazo enviaré a vuestra honorabilidad el proyecto de ley pertinente.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

AGUSTÍN P. JUSTO.  
Luis Duhal.

9

### UNIFICACION DE IMPUESTOS INTERNOS

Sr. Presidente (Noble R. J.). — En consideración el artículo 3º.

Sr. Arce, — En el segundo párrafo de este artículo, después de los tres cuadros, se habla de censo. De la misma manera que en Nación, pueden las provincias hacer censos y aprobarlos. Corresponde, entonces, que se establezca que se refiere a censo nacional.

No hago la proposición porque parece que el señor presidente de la Comisión de Presupuesto le molesta que yo colabore, no con la comisión, sino con la obra del Congreso a que pertenezco.

Sr. Martínez. — Como todavía no han sido puestas las cortinas, no he podido oír las primeras palabras del señor diputado por Buenos Aires. (Risas).

Br. Ministro de Hacienda. — Se trata de poner «censo nacional» en lugar de «censo».

Sr. Martínez. — Agradecemos y aceptamos, o por lo menos personalmente acepto y agradezco la colaboración del señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se va a votar el despacho de la comisión y luego se votará el agregado.

Sr. Ministro de Hacienda. — Lo ha aceptado la comisión.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — No señor ministro, por cuanto el señor diputado secretario de la comisión, ha advertido que ella no puede reunirse.

Se va a votar el artículo 3º del despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se va a votar la proposición del señor diputado por Buenos Aires, que consiste en el agregado de la palabra «nacional», después de la palabra «censo», en el artículo 3º.



Sr. Dickmann (E.). — Eso obligará al Congreso a votar pronto un nuevo censo nacional.

— Resulta afirmativa.

— Sin observación, se aprueban los artículos 4º y 5º.

Sr. Dickmann (A.). — Pido la palabra. Re presentado un artículo nuevo a continuación del 5º, que correspondería tratar ahora.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se va a dar lectura del artículo propuesto por el señor diputado por la Capital intercalado entre los artículos 5º y 6º del despacho de la comisión.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — «La Municipalidad de la Capital y las municipalidades de los territorios nacionales recibirán, en conjunto, como participación en la distribución de los impuestos nacionales unificados al consumo, el 33 % de la mayor recaudación que importa para la Nación el aumento de las tasas aplicadas en territorio federal. La cuota que corresponda a cada una de las municipalidades, se asignará de acuerdo a su población, conforme al último censo aprobado por ley.»

Sr. Presidente (Noble R. J.). — En consideración.

Sr. Dickmann (A.). — Pido la palabra

La proposición que formula el bloque socialista no es improvisada ni nueva. Desde que comenzó el estudio de este proyecto de ley, ya en la reunión conjunta de la comisión con los señores ministros de Hacienda de provincias, anuncié el propósito de los miembros socialistas de la comisión, de proponer oportunamente la participación de la Capital y de los territorios nacionales en la distribución del impuesto interno unificado al consumo. Más tarde, en la numerosa subcomisión designada para estudiar el proyecto, que ha contado permanentemente con la colaboración del señor ministro de Hacienda y de sus numerosos y distinguidos técnicos, he formulado.

Sr. Ministro de Hacienda. — Notan numerosos, señor diputado.

Sr. Dickmann (A.). — , concretamente la iniciativa. Lo hicimos en el momento oportuno, es decir, al iniciarse la labor, pero no hubo pronunciamiento sino al final. Era una cuestión de táctica de la mayoría.

Este no fué en la subcomisión ni adverso ni favorable. Se resolvió enviar el artículo, sin abrir opinión sobre el mismo, a la comisión en pleno, y fué en ésta donde se lo rechazó por una escasa mayoría de votos.

No es nuevo el concepto que sostenemos. Figura en muchas de las iniciativas que precedieron a la actual del señor ministro de Hacienda. Ya el señor diputado por Córdoba, miembro informante de la mayoría, citó los proyectos y recaló aquellos en que la disposición estaba contenida. Para la unidad de mi exposición, voy, sin embargo, a recordarlos nuevamente.

El proyecto del señor diputado por Buenos Aires doctor Luis Agote, presentado en 1913, establece, en su artículo 4º, la participación de la Capital Federal con el 3 % sobre el total producido, fijándosele destinos de beneficencia, y previsión social.

En el proyecto del doctor Ahumada, ex administrador de Impuestos Internos, uno de los funcionarios que han honrado a esa repartición.

Sr. Ministro de Hacienda. — Y al foro, como uno de sus miembros más distinguidos.

Sr. Dickmann (A.). — Y al foro, lo que da más valor a mi argumento, el doctor Ahumada en 1916, bajo el gobierno del doctor de la Plaza presentó un proyecto que no fué enviado al Congreso. Más tarde, durante el gobierno del doctor Alvear, lo reiteró non mejor suerte. El artículo 142 de ese proyecto, establece que la renta interna nacional se distribuirá mensualmente entre la Nación, las provincias y la Capital Federal en la forma que determina el mismo.

Un diputado, de quien siempre conservamos un grato recuerdo, el doctor Juan Antonio González Calderón, cuya autoridad en materia constitucional no es seguramente discutida, especialmen-

te por lo o señores diputados de la derecha, en el año 1932 formuló un proyecto sobre unificación de impuestos internos, en cuyo artículo 7° establece que, el Poder Ejecutivo entregará a la Municipalidad de la Capital Federal y a los gobiernos de las provincias que se ajusten a las disposiciones de la ley, en proporción a la población respectiva, el 30 % del producido de dichos impuestos internos.

Y un proyecto, señores diputados, que no pertenece al legislador ni a un personaje encumbrado, que ha sido elaborado por un dignísimo funcionario público que no ha sido nombrado en este debate, y que ha sido sin embargo tenido en cuenta y merecido elogios del señor ministro de Hacienda en el seno de la comisión.

Sr. Ministro de Hacienda. — Y en el mensaje.

Sr. Dickmann (A.). — ... me refiero al señor Alfredo S. Goffi, inspector general de Alcoholes, a quien no tengo el gusto de conocer, pero cuyo trabajo he leído con gran provecho y seguramente lo han leído también los técnicos que han preparado este proyecto.

Sr. Ministro de Hacienda. — ¿Cómo cree eso?

Sr. Dickmann (A.). — ... establece en su artículo 4º, que la Municipalidad de la Capital y los erarios provinciales tienen derecho a percibir en conjunto hasta el 40 % de la renta que origine el sistema nacional de impuestos internos al consumo.

Y me resulta tanto más grato hacer este elogio merecido al funcionario de referencia, porque me consta que en este momento está gravemente enfermo. Que le sirva esta mención en el Parlamento de su país como lenitivo en su desventura.

El señor ministro de Hacienda en el seno de la comisión y en su discurso en la Cámara ha negado a la Capital los derechos legales de participar en la distribución de estos impuestos unificados.

El señor ministro dice: «Como nada se le quita, nada hay que darle». Y el señor diputado por Buenos Aires, en su breve exposición de ayer, anticipan-

do en cierto modo el debate, que corresponde en este momento, afirmó que ignoraba la existencia de una provincia número 15.

No es el caso, señores diputados, entrar en este momento de la consideración particular del proyecto, a discutir sobre los títulos legales y constitucionales que tiene la Capital de la República para considerarse una entidad de derecho legítimo, a ser tenida en cuenta en la distribución de estos impuestos. Eso ha sido ya largamente debatido y lo será seguramente cuando alguna vez la Comisión de Legislación Municipal, que preside el propio señor diputado por Buenos Aires, se decida a despachar el proyecto de la diputación socialista, presentado por primera vez en el año 1922 por el diputado que habla, y renovado cada dos para salvarlo del olvido en que lo coloca inexorablemente la ley Olmedo.

Sr. Arce. — Ese trabajo está muy avanzado, señor diputado.

Sr. Dickmann (A.). — Tengo conocimiento de ello; y si el señor diputado quiere unir su nombre a una buena obra, despáchelo cuanto antes.

Sr. Arce. — No tenga duda que lo voy a despachar, por lo que a mí respecta.

Sr. Dickmann (A.). — Evidentemente, mientras la Capital de la República no tenga una nueva carta orgánica, y viva bajo el imperio de la ley 1.260, del año 1882, su progreso y su desarrollo estarán trabados por la falta de recursos, por un lado, y por la mala fuente de los que actualmente está autorizada a percibir, por otro.

Con la federalización de la Capital, a ciudad de Buenos Aires no ha podido borrar su historia anterior. La federalización es un hecho muy auspicioso, pero la existencia de la ciudad y sus privilegios son muy anteriores; el Cabildo primero y el municipio libre después, dan a esta ciudad características propias e inconfundibles. De modo que no es negándole rotundamente esos títulos, cómo se podrá cohonestar los que evidentemente tiene para participar en los beneficios de esta ley.

El derecho de participar en todos los habitantes en el deber que tienen de contribuir.

Sr. **Ministro de Hacienda.** — ¡Tenga cuidado! No diga eso. Cuando se discutió la ley se dijo por uno de los hombres del año 1882, a que se ha referido el señor diputado, que por eso el voto municipal era calificado. ¡Tenga cuidado!

Sr. **Dickmann (A.).** — Nada tiene que ver con esto. Todos los habitantes son contribuyentes y, por lo tanto, electores.

Sr. **Ministro de Hacienda.** — Pero así se dijo.

Sr. **Dickmann (A.).** — ¿Quién puede negar señor presidente, que la Capital y los territorios nacionales contribuyen a la formación de este grueso rubro de las rentas fiscales, con una cantidad que alcanza más o menos a la mitad de su monto? La población de la Capital y la de los territorios nacionales es la cuarta parte de la República y es también la población más consumidora. Los impuestos son tanto más soportables cuanto su distribución vuelve, en forma de servicios públicos o funciones del Estado a los propios contribuyentes.

Por otra parte, no será nuevo este sistema de dar a la Capital participación en leyes de impuestos que ella no tiene derecho de gravar. Está la ley de contribución directa que entrega a la Municipalidad de la Capital el 33 % del producido. La Municipalidad de la Capital está impedida, desgraciadamente, de establecer una contribución directa sobre el suelo de la ciudad.

En cuanto a los territorios nacionales participan en la recaudación de patentes con un porcentaje del 60 por ciento.

¿Las objeciones de orden legal formuladas por el señor ministro no serían también aplicables a las provincias? ¿Todos los impuestos que se les ha reconocido son constitucionales?

Sr. **Ministro de Hacienda.** — Así se ha declarado.

Sr. **Dickmann (A.).** — La Corte Suprema no lo ha declarado siempre así, como lo vamos a demostrar.

Sin embargo, figuran con gruesas sumas en el monto reconocido a las provincias en la unificación de los impuestos. Sin el ánimo de molestar a los señores diputados por Tucumán — que en este debate llevan la peor parte — tendré que hacer referencia a un caso de esa provincia.

Tengo en mis manos un documento emanado de la intervención, relativo al estado financiero de la provincia. En ese documento me encuentro con que entre las graves dificultades que ha tenido que afrontar para ordenar el caos de las finanzas de la provincia, está precisamente la devolución de 1.300.000 pesos en cumplimiento de un fallo de la Corte que declaró por segunda vez, inconstitucional una ley de impuestos internos provincial sobre el vino. Sin embargo, eso no ha impedido para que se le compute ese impuesto ilegal.

En la planilla oficial enviada por la intervención figura en el quinquenio correspondiente al tomado como promedio para el despacho en discusión.

—Suena la campanilla que indica que ha terminado el término reglamentario.

Sr. **Presidente (Noble R. J.).** — La Cámara resolverá si se concede la prórroga para continuar en el uso de la palabra.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. **Dickmann (A.).** — Aunque voy a ser breve, pido desde ya alguna pequeña prórroga más para terminar mi exposición.

En esa planilla figura el impuesto a los vinos, en 1929, con la suma de 1275.000 pesos; en 1930, con 1.115.000; con 965.000 en 1931; con 871.000 en 1932; y con 889.000 en 1933.

El señor ministro se opone a la participación de la Capital y de los territorios nacionales, no porque es el «hijo avaro de la ciudad», sino porque es el cajero nacional. En este sentido le reclamo que aplique esa misma rigidez en toda la ley.

Sr. **Ministro de Hacienda.** — Me habría ayudado mucho el señor diputado

si la observación que hace ahora respecto del impuesto provincial, que no debe ser computado, la hubiera hecho hace cinco minutos.

Sr. Dickmann (A.). — Sé demasiado que todo lo que está impreso está consagrado.

Sr. Ministro de Hacienda. — Sobre todo si ustedes lo han votado.

Sr. Dickmann (A.). — No es el único caso, porque están computados otros impuestos, cuya inconstitucionalidad también ha sido declarada por la Corte.

He dicho que el señor ministro no ha sido tan rígido, con las provincias como con la Capital y los territorios. El primitivo proyecto del Poder Ejecutivo entregaba a las provincias 78 millones y el despacho les otorga 91 millones.

Sr. Ministro de Hacienda. — ¿Noventa y un millones?

Sr. Dickmann (A.). — Entre los impuestos a la producción, los impuestos al consumo, réditos y ventas.

Sr. Ministro de Hacienda. — ¿Correspondientes a qué año?

Sr. Dickmann (A.). — Esas son las cifras que yo he tomado de la exposición de ayer de mi colega.

Sr. Ministro de Hacienda. — Las ha tomado mal.

Sr. Dickmann (A.). — La participación de las provincias en conjunto del impuesto al consumo, a los réditos y a las ventas será, no ya de 78.000.000, sino de 91.000.000.

Sr. Simón Padrós. — Son 87.000.000.

Sr. Ministro de Hacienda. — Contando réditos.

Sr. Ghioldi. — Yo tengo la cifra de 91.000.000: 40,8 los impuestos al consumo; 31,9 participación en el impuesto a la producción; 14 a los réditos y 5,2 a ventas.

Sr. Ministro de Hacienda. — ¡Cómo puedo haber cedido, cuando todavía estoy protestando a más no poder para que se saquen en materia de réditos!

Sr. Noble (J. A.). — ¿No acepta todavía?

Sr. Ministro de Hacienda. — ¡Cómo voy a aceptar

Sr. Dickmann (A.). — Hay otra consideración que es decisiva en nuestro punto de vista. Las poblaciones de la Capital y de los territorios nacionales serán las únicas que van a tener un aumento de impuestos, en tanto que las de las provincias recibirán una desgravación; porque es evidente que las tasas aumentadas no representan exactamente la suma de las nacionales y provinciales reunidas. Son bastantes inferiores, especialmente en algunos rubros. En cambio, en la Capital Federal y en los territorios nacionales no había más tasas que las nacionales; entonces, habiéndose éstas elevado, en realidad, los únicos que quedan más gravados son los pobladores de la Capital y los de los territorios nacionales.

Yo sé que el señor ministro en el conjunto tiene un quebranto. Lo acaba de manifestar. Aun con sus hipotéticos 8.000.000 de pesos del impuesto a las sucesiones.

Sr. Ministro de Hacienda. — Con nuestros.

Sr. Dickmann (A.). — Con nuestros hipotéticos 8.000.000 de pesos el quebranto es de 14.000.000 de pesos.

La población de la Capital y de los territorios recibe un aumento en los impuestos consolidados, si no en el vino y en el azúcar, en la cerveza. La cerveza pagaba 0,04 y ahora pagará 0,05. Las provincias, en cambio, salen desgravadas en materia de cerveza, en algunos casos monstruosamente.

Sr. Ministro de Hacienda. — Monstruosamente era el gravamen en la ciudad de Tucumán.

Sr. Dickmann (A.). — Así es, pero me refiero al recargo para una parte de la población y a la desgravación de la otra.

Con respecto a los cigarrillos, si bien es cierto que su consumo no es deseable, pero desgraciadamente es popular y general. Somos pocos los felices mortales que a 110 le vamos a dar al fisco ni un centavo con este aumento.

Los cigarrillos, de precios populares o no, van a sufrir un doble aumento: un aumento en la tasa y una disminución de cantidad. El fisco se mete hasta

en la cantidad de producto que debe ponerse en cada marquilla: no SC puede poner más de diez cigarrillos, que no deben pesar más de 12 gramos y medio.

Sr. Ministro de Hacienda. — Hoy también.

Sr. Dickmann (A.). — Pero hoy se ponen 12 y de 15  $\frac{1}{2}$  gramos de peso. Ahora se disminuye la cantidad de tabaco y se aumenta el gravamen.

El aumento del producido en tabacos, que el señor ministro calcula en 10.000.000 de pesos será a expensas, en gran parte, de la población de la Capital y de los territorios federales.

Sr. Ministro de Hacienda. — No puede sostenerse eso. El tabaco, en su conjunto, aun con los 10.000.000, no está comparado con lo que perciben hoy In Nación y las provincias, sino sólo con lo que percibe la Nación.

Sr. Dickmann (A.). — Es uno de los productos desgravados también en conjunto, pero gravado para la Capital y territorios nacionales.

Sr. Ministro de Hacienda. — Es exacto que SC grava más el tabaco, pero no es exacto que los 10.000.000 saldrán sólo de la Capital.

Sr. Dickmann (A.). — ¿Y de dónde van a salir si no se aumenta la tasa para las provincias?

Sr. Ministro de Hacienda. — Esa sobretasa la paga todo el país.

Sr. Dickmann (A.). — Pero como se suprimen las tasas provinciales...

Sr. Ministro de Hacienda. — Quiero decir, que para ellos se abarata.

Sr. Dickmann (A.). — Se han aumentado los impuestos a las cubiertas, así como los de algunos artículos de tocador.

En definitiva, según un cálculo hecho por el señor Sáenz, funcionario que ha colaborado tan activamente con el señor ministro y con la comisión en estos proyectos, el mayor producido por el aumento de las tasas en todo el país importaría 53.000.000 de pesos. Para tener un índice más o menos aproximado de lo que ese aumento significa para la Capital y territorios, se ha determinado que, siendo esa población el 24,2 % del total del país, le corres-

pondería, en el caso de que el consumo fuese igual por habitante, cosa que no es exacta, especialmente para regiones más cultas, sería, digo, en conjunto, de 12.826.000 pesos. El 33 % propuesto para repartirlo entre la Capital y territorios, importaría 4.200.000. ¿Puede darse una proposición más discreta? El señor ministro se ríe, seguramente porque recuerda algunos golpes al bolsillo que le han dado sus amigos, que en una sentada le han sacado más del doble de esta suma.

Sr. Ministro de Hacienda. — Merió del fundamento.

Sr. Dickmann (A.). — No sería completa mi exposición si me refiriera exclusivamente a la Capital Federal, porque, entonces, parecería una actitud puramente política, y no hay tal. Si bien somos mayoría en la Capital, también es cierto que por la organización de la municipalidad no nos corresponde la Intendencia, que es la que maneja el dinero. Más: el Concejo Deliberante, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 5.098, no puede aumentar los sueldos ni establecer impuestos sino cuando éstos y aquéllos han sido iniciados por el Departamento Ejecutivo. De manera, que no defendemos en ningún caso dineros que vamos a manejar; y, si los manejáramos, tenemos antecedentes suficientes para acreditar que lo haríamos con provecho para la colectividad.

Quiero recordar también a los territorios nacionales, que no sólo son gravados por el aumento de tasas, sino que en algunos casos, como los de Río Negro y Neuquén, son realmente perturbados en su evolución económica, que se realizaba hasta ahora tranquilamente. La unificación es para ellos una verdadera calamidad.

Hemos tenido el placer de recibir en el seno de la subcomisión a una delegación enviada por el comercio, la industria, la producción y las municipalidades de estos dos territorios; y digo que fué un placer porque eran todos pobladores auténticos venidos de la región y de una composición que no podía ser más ecléctica ni más amplia: desde el intendente socialista de Neu-

quén, hasta el reverendo padre Benigno Champoud por Choele Choel, Lamarque y Luis Beltrán.

Sr. Ghioldi. — El reverendo padre, ¿era representante de una firma comercial de vinos? (*Risas*).

Sr. Dickmann (A.). — No, señor diputado. Los nombres que he dado son los de las localidades que representaba; al menos esta es la información que tengo.

Sr. Ghioldi. — Hice la pregunta en la comisión, y no obtuve respuesta.

Sr. Dickmann (A.). — Los representantes se hicieron escuchar en el seno de la subcomisión, expidiéndose con una discreción que yo desearía al menos igual para los diputados de las provincias. Comenzaron por no oponerse a la unificación de impuestos, manifestando textualmente, en el memorial en que concretaron sus observaciones verbales, lo siguiente:

«El proyecto de unificación de impuestos internos significa, en lo que **SO** refiere al vino, consagrar definitivamente como bueno y razonable el impuesto más desproporcionado que rige en el país, ya que representa, a 1 precio actual, el 70 % del valor --, valor estimado recientemente por el gobierno de Mendoza en 7 centavos el litro — tiene a nuestro juicio por su monto. .»

—Suena una campanilla que anuncia la conclusión del término acordado al orador.

Sr. Presidente (Noble R. J.). -- Si el señor diputado habla en representación de su bloque, puede hacerlo sin limitación de tiempo.

Sr. Diclunnnn (A.). — Si, señor, voy a terminar en breves minutos.

«La característica de una medida de emergencia que no puede ser resistida.» Comenzaron por no resistir, ni siquiera verbalmente, una medida que les impone \$ 0,045 más de impuesto a su producción por litro de vino. Ellos aceptan el sacrificio, ante la necesidad perentoria de las finanzas y en aras de la ordenación económica que se pro-

yecta: pero piden que, a 1 igual que a los demás, se les dé una participación para atender las necesidades de los territorios, siempre descuidadas.

En Río Negro se elaboran hasta 340.000 hectolitros de vino que, con el impuesto de medio centavo, pagaba \$ 170.000; ahora pagará \$ 1.700.000.

De esta enorme contribución piden una participación tan modesta como la que tocaría a cada municipalidad dentro del conjunto de los \$ 4.200.000.

Sr. Ministro de Hacienda. — ¿Piden por intermedio de quién?

Sr. Dickmann (A.). — Por intermedio de este memorial. . .

Sr. Buira. — Única forma en que pueden pedir los territorios.

Sr. Dickmann (A.). — Dirigido a la Comisión de Presupuesto y al Congreso nacional.

«No obsta esta circunstancia, dicen, para que los territorios de Río Negro y Neuquén, comprendiendo el alto espíritu de solidaridad nacional expresado en los considerandos de la ley de unificación, no sólo en lo que se refiere a establecer un tratamiento uniforme, pero también un tratamiento que permita evitar la guerra de tarifas y con ello el fomento de los antagonismos regionales, no sólo no pretenden quebrar la unidad de acción, sino que aceptan gustosos el cooperar a la acción conjunta que se inicia. Lo que causa el movimiento de resistencia y protesta producido últimamente y que mantiene los ánimos excitados, es una absoluta desigualdad en el trato que se da a nuestras regiones con respecto a las otras del país. El hecho de vivir en territorios nacionales nos deshereda de todo derecho, somos dentro de nuestra patria, ciudadanos para el efecto de servir al país, cumplir las leyes, pagar los impuestos, pero para con nosotros no se cumplen los principios fundamentales de toda legislación: el que tiene deberes tiene derechos; el derecho de cada uno termina donde comienza el derecho de los demás». Y más adelante hace atinadísimas observaciones, que para no fatigar a la Cámara y para no excederme excesivamente en la tolerancia de la Presidencia. .

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Es la aplicación estricta del reglamento que le da ese derecho, señor diputado.

Sr. Dickmann (A.). — voy a insertar, con permiso de la Cámara, el memorial en el Diario de Sesiones. (1)

Presumo que el señor ministro va a hacer tal vez alguna objeción de redacción a ningún artículo, correcciones a las que es tan afecto, pero él tampoco escapa a las mejoras de redacción que nosotros frecuentemente le formulamos.

Sr. Ministro de Hacienda. — Afortunadamente.

Sr. Dickmann (A.). — Debo advertir al señor ministro que he corregido una sola vez esa redacción; llevo la ventaja sobre él que ha corregido siete veces los proyectos del Poder Ejecutivo.

Dice el artículo: «La Municipalidad de la Capital y las municipalidades de los territorios nacionales recibirán en conjunto como participación en la distribución de los impuestos nacionales uniformes al consumo, el 33 % de la mayor recaudación que importa para la Nación el aumento de las tasas aplicadas en territorio federal.» No pedimos una participación en conjunto, sino sólo en aquella parte que representa el aumento de gravámenes sobre los actuales vigentes en la Capital y territorios nacionales. Continúa el artículo: «La cuota que corresponda a cada una de las municipalidades, se asignará de acuerdo a su población, de conformidad al último censo aprobado por ley.»

El señor ministro en su exposición de ayer, en uno de sus arranques de alta elocuencia, decía:

«Concibo como absolutamente desprovista de razón la actitud de aquellos que se niegan a la consagración de un principio justo y progresivo, porque beneficia demasiado a las provincias. Si tendremos sino que felicitarnos de que los Estados federales salgan cuanto antes de la situación actual; y si para ello el reparto adquiere en algún momento el carácter de subvención federal, no hagamos de ellas mayor cuestión, ya que estamos constitucionalmen-

te autorizados para darlas, si políticamente, en el más amplio sentido de la palabra, es lógico que así lo hagamos y si económicamente no perturba, si por su cuantía no hace falta a las finanzas nacionales una brecha demasiado grande.»

Yo me permití interrumpirle, conmovido ante esta desconocida generosidad en él, — yo que lo he visto regatear durante mes y medio en el seno de la comisión aunque después también lo he visto aflojar en todo a sus amigos, — le manifesté: «Seguramente el señor ministro mantendrá ese criterio con toda amplitud». Y el señor ministro respondió: «Efectivamente». Pero nos ha desengañado de inmediato. Cuando se planteó el caso concreto, volvió otra vez a aparecer «el cajero nacional», que, indudablemente, es una de las funciones menos gratas, pero muy necesaria de los ministros de Hacienda.

Si realmente se quiere determinar la unidad económica del país y que estos impuestos no sean resistidos por la parte más culta y numerosa de la población que no recibe en este caso sino perjuicios, primero, con las demasías de las provincias al gravar el consumo nacional con impuestos que no tienen, evidentemente, derecho de establecer, y ahora, soportando su aumento, debe la Cámara dar esta pequeña participación a la Capital Federal y territorios nacionales, que la necesitan con urgencia.

El señor diputado por Buenos Aires, doctor Arce, dijo en la sesión de ayer que el patrimonio de la Nación era también el de la Capital y de las provincias; pero es que hay patrimonios y hay cajas; la caja federal no es la caja de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires, aun cuando es rica, dado su portentoso crecimiento que todos saludamos tan jubilosos como «el hijo predilecto de la ciudad».

Sr. Ministro de Hacienda. — Me voy a ofender, como su colega.

Sr. Dickmann (A.). — ... a la que imamos tanto como él, y a la que hemos servido desde todas las situaciones en que nos ha colocado la voluntad

(1) Véase pág. 497.

popular, en el modesto puesto de concejal municipal — y en el más aparentemente sonoro de diputado —, tiene grandes necesidades que satisfacer y no cuenta con los recursos suficientes; sobre todo no tiene fuentes sanas de dónde tomarlos con abundancia.

Se está debatiendo en estos momentos en el Concejo Deliberante el pavoroso problema de la hospitalización, que no es únicamente de la ciudad de Buenos Aires sino de gran parte del país. Si fuéramos un país realmente organizado, como lo fué la Alemania de antes, no hubiéramos tenido que cargar gratuitamente con todos los enfermos que todos los municipios de la República nos envían. Aquí están todos los centros científicos más prestigiosos; de todas partes de la República se viene a consultar y curar a nuestros institutos, a nuestros profesores, a nuestros cirujanos y los acogemos sin ningún arancel ni traba. Necesitamos, por lo tanto, otorgar a la Capital Federal este subsidio para que pueda desenvolver su acción eficientemente.

Quien dice esto de la Capital lo dice todavía más acentuadamente de los territorios nacionales que viven en una indigencia espantosa.

Si el señor ministro de Hacienda desea realmente vincular su nombre a una obra que desde ya él supone que será histórica, otorgue su asentimiento a esta partida y habrá mejorado notablemente la ley.

Y ya que me he referido a la opinión que sobre su proyecto ha manifestado el señor ministro en la sesión de ayer, permítame que con toda amabilidad ponga una nota un tanto escéptica sobre su gran ilusión. Conviene no tener tanto optimismo sobre la propia obra, especialmente en materia como esta. Todos los cálculos pueden fallar.

Vean los señores diputados con qué modestia, con qué simplicidad, con qué humildad, diría, se presenta el ministro del tesoro de la poderosa Gran Bretaña, Mr. Newell Chamberlain, ante la Cámara de los Comunes exponiendo su plan de presupuesto para 1935, anunciando al país hechos auspiciosos, que

desgraciadamente todavía no ha podido hacer nuestro ministro de Hacienda. Anuncia Mr. Chamberlain a la población británica esto: «Después de todo — dice el ministro Chamberlain — no creo que haya razón para que alguien resulte decepcionado. Veintinueve millones de libras — se refiere al superávit — si no es un resultado brillante es al menos un sobrante de cierta consideración. Es el mayor que hayamos realizado en los últimos años y es suficiente para permitir iniciar el proceso tan largamente esperado del alivio de las cargas y sacrificios de los años que acabamos de pasar.»

Más adelante, anuncia esta otra grata nueva para la población de la Gran Bretaña, que el señor ministro argentino tampoco puede hacer.

Sr. Ministro de Hacienda, —¿Me permite dos palabras sobre eso?

Sr. Dickmann (A.). — Sí, señor ministro.

Sr. Ministro de Hacienda. — Si el presupuesto es previsión, nosotros hemos sido más previsores que los ingleses, porque nosotros previmos que se iba a hacer la conversión y borramos del presupuesto la cantidad respectiva. Los ingleses no lo previeron y se tradujo en superávit.

Sr. Dickmann (A.). —¿Es la respuesta que el señor ministro da a Mr. Chamberlain?

Sr. Ministro de Hacienda. — No es respuesta. Simplemente informo sobre hechos. Ellos no previeron que harían a conversión y nosotros sí.

Sr. Dickmann (A.). -- Dice el señor ministro de Hacienda de Inglaterra: «Mientras en otros países las reducciones de sueldos y pensiones — eso parece escrito para el señor ministro argentino — deben todavía ser encaradas, mientras en otros países los contribuyentes esperan vanamente un alivio para sus cargas, por el contrario, estas deben aumentar sus sacrificios y añadir nuevas contribuciones al Estado, aquí por lo menos podemos pensar que hemos pasado lo peor y congratarnos de estar en situación de poder remover una parte substan-



cial de la carga que pesaba sobre nosotros, sin el temor por el momento de que haya necesidad de restablecerla.»

Y por último, dice: «Tengo en este momento la satisfacción de estar al fin de una situación de poder proporcionar a los contribuyentes un alivio para sus cargas y pensar que alivio ha de significar un aceleramiento en el proceso de la normalización.»

Sin jactancias, sin cantar loas a la propia obra, el ministro de Hacienda de Inglaterra sabe la relatividad del esfuerzo de un hombre en el terrible caos económico del mundo. hechos y enuncia con verdad y eufemismos.

hubiera, señor presidente, en nuestra obra personal o de algo realmente importante, contribución al progreso del país y a la evolución de sus instituciones, dejemos a los que miran desde afuera y a los que nos juzgarán en el tiempo, el juicio histórico definitivo. Anticiparse a él, sobre todo en vida, tiene muchos riesgos, señor ministro; entre otros, el de presenciar la disputa acerca del sitio donde su ha de ubicar el pedestal para sostener la presunta estatua consagradoria.

Nada más. (*Muy bien! Muy bien!*).

Sr. Ministro de Hacienda. — Pido la palabra.

El señor diputado por la Capital, doctor Dickmann, ha dicho lo mejor que puede decir sobre la tesis que ha sostenido.

Sr. Dickmann (A.). — Voy ganando algo.

Sr. Ministro de Hacienda. -- Hatoeado todas las fibras, ha sido por momentos optimista, por momentos trápico, me ha repetido por tercera vez que no debo elegir el pedestal de mi estatua — cosa en la que le encuentro sobrada razón —; pero sobre el asunto concreto que motiva su intervención no ha dado las razones que justifiquen su tesis.

Es absolutamente exacto lo que se ha dicho ayer sobre el carácter de esta ley y sobre la solución que ella contiene respecto de la Capital. Esta es

una ley de unificación de impuestos nacionales y provinciales, por la cual se suprimen estos últimos y la Nación entra a repartir los impuestos.

Sr. Ghioldi. — Si me permite el señor ministro.

Una ley de la Nación dictada hace pocos años, con toda razón y justicia impositiva, ha prohibido a la Capital Federal aplicar impuestos a los consumos tal como los aplicaba.

Sr. Ministro de Hacienda. — Así es.

Sr. Ghioldi. — Y en compensación de esa ley prohibitiva, no le dió ningún otro recurso.

Sr. Ministra de Hacienda. — Ni se pidió. Ya me referiré a eso; es una ley que votamos nosotros.

La ley de unificación contempla a los Estados con facultad impositiva, les pide que renuncien a ella y las compensa con una suma de dinero.

Si esa suma de dinero está bien o mal graduarla, si se ha computado en ella el producido de algún impuesto inconstitucional que debe devolverse, es asunto de otro orden que han podido plantear los señores diputados y que en parte se ha planteado. Pero esta ley no lleva como conclusión, ni puede llevarla — sería algo pegado a ella, pero no algo que surja de ella — la participación de la Capital en el reparto. La Capital de la República no es uno de los Estados argentinos que renuncie por este acto a una parte de su poder impositivo; no se le quita siquiera parte alguna de sus actuales rentas; y entonces no tiene por qué estar comprendida la Capital entre los Estados que participan en el reparto de los impuestos nacionales.

Po sí: que esta proporción — quiero creerlo; no lo dudo ni lo discuto — está hecha con el fin más elevado. Me abstengo de suponer que se deba a motivos electorales, porque los diputados socialistas son mayoría, a veces, en la Capital.

Sr. Dickmann (E.). — Muchas veces.

Sr. Ministro de Hacienda. — Muchas veces hemos ganado juntos elecciones en la Capital; juntos hemos perdido unas cuantas y desde que estamos se -

parados, ustedes nos han ganado dos y nosotros les hemos ganado dos. (*Risas*). Esa es la realidad.

Sr. Ghioldi. — ¿Cuáles son las perspectivas futuras? (*Risas*).

Sr. Ministro de Hacienda. — No quiero vaticinar eso, como no quiero vaticinar si voy a tener estatua.

No existiendo una razón en la ley que justifique la participación de la Capital ¿por qué se le daría?

Sr. Dickmann (A.). — ¿Por qué se le da en los réditos?

Sr. Ministro de Hacienda. — Dice el señor diputado que se le daría por mil razones: la Capital está más gravada con estos impuestos, necesita recursos, es un refugio de los enfermos del resto del país, a los que atiende con sus propios medios.

Hay mucho de cierto en eso. La Capital es efectivamente un refugio de los enfermos de todo el país. Pero también es cierto, señor diputado, que la Capital tiene buena parte de su presupuesto a cargo de la Nación, lo que no les sucede a las provincias. Por ejemplo, en lo que respecta a la justicia, la de la provincia de Córdoba o de la provincia de Buenos Aires, pesa sobre las espaldas del pueblo de Córdoba y de Buenos Aires. En cambio, la justicia de la Capital Federal pesa sobre las espaldas del pueblo de toda la República.

La instrucción pública, en la Capital y territorios nacionales pesa sobre las espaldas del fisco nacional y la paga en buena parte, con los impuestos indirectos, la población de toda la República. No ocurre lo mismo en las provincias.

La policía de nuestro distrito, de mi ciudad natal, la paga todo el país y es un servicio estrictamente municipal, que algunas veces juntos hemos pedido que se traspase a la municipalidad.

Sr. Dickmann (A.). — Siempre que se le dé la fuente de recursos.

Sr. Ministro de Hacienda. — Mucho antes que esos pedidos, señor diputado, creo haber hecho con el señor diputado Dickmann algunos programas

de conferencias rectorales para los oradores del partido socialista. Hace muchos años, cuando no éramos diputados ni pensábamos serlo, no se hablaba de estas cosas, pero creíamos que la policía, como entidad municipal, podría ingresar al municipio.

Hay otra circunstancia que no puede olvidarse. La Capital, así como atrae a los enfermos y a los locos del resto del país, para ser atendidos aquí. . . (*risas*)

Sr. Ghioldi. — No están todos los que son.

Sr. Ministro de Hacienda. . . , atrae, también, una suma ingente de riqueza, que aprovecha evidentemente la población de la ciudad. Si no estuvieran aquí centralizadas las oficinas nacionales, si no estuviera aquí centralizado el Correo y la Aduana, ¿creen los señores diputados que In ciudad de Buenos Aires tendría los mismos recursos que tiene? Si todo el armazón de un gran país, situado en la Capital, no le atrae riqueza, no sé qué le atraería riqueza. ¿No ven a la ciudad de La Plata crecer y ampliarse por el hecho de ser la capital política de un gran Estado, no obstante In vecindad al distrito federal?

La ciudad de Buenos Aires ha crecido enormemente en razón de ser la Capital de la República. Po le auguro un porvenir mucho más grande, pero no creo que necesite que se le compense con esta ley.

Es cierto también lo que ha dicho el señor diputado, respecto a que algunos de estos impuestos gravarán en mayor medida, incidentalmente a la Capital, si es que ellos no se sancionaran, aun prestando de la unificación.

Sr. Dickmann (A.). — Sería muy difícil pensar en aumentos de impuestos si no hubiera unificación.

Sr. Ministro de Hacienda. — No sé; no estoy convencido.

Sr. Dickmann (A.). — So conspire contra su escasa popularidad anunciando más impuestos. (*Risas*).

Sr. Ministro de Hacienda. — So es-

toy seguro de eso. El país se da a los impuestos que el Congreso quiere, y ese acto soberano del Congreso pesa sobre la Capital, haya o no unificación. En este caso el aumento de los impuestos, con desmedro de mi popularidad, como dice el señor diputado Dickmann, se hace para llenar el hueco que va a dejar en las arcas fiscales la unificación; pero lo mismo podría hacerse sin la unificación, como ha sucedido en múltiples oportunidades.

De manera que no es justo quejarse de la unificación por esa causa. De lo que podrían quejarse, en todo caso, es del aumento de impuestos, que yo no creo que pesen sobremanera en las espaldas de este pueblo.

El señor diputado ha mencionado el tabaco, pero no con tanta exactitud, como ya lo he expresado en una interrupción. El tabaco va a dar más recursos a la Nación porque sobre los impuestos existentes, que paga todo el país, se cobrará un suplemento que también pagará todo el país. La cerveza aumentará en un centavo y no es creíble que eso provoque el mayor precio del producto.

Sobre las cubiertas, ha dicho el señor diputado que el impuesto lo paga todo el país. En eso yo aceptaría su propia tesis, diciendo que buena parte lo pagala Capital porque es notorio que está en la Capital el mayor número de automóviles. Tal vez el señor diputado que no discute los argumentos en pro.

¿Pero eso justifica el adefesio legal que significaría introducir en esta ley, como provincia a la Capital de la República?

Sr. Dickmann (A.). — ¿El único adefesio de la ley sería ese?

Sr. Ministro de Hacienda. — Una cuestión de orden más general. Como dijo el señor diputado, la Capital tiene participación en otros impuestos federales, como es la contribución directa. Es cierto; pero busque el señor diputado, que es tan laborioso, el origen de la disposición y lo va a encontrar:

fué con el propósito de permitir la consolidación de la deuda municipal.

Esa fué el origen de la participación que tuvo la ciudad en la contribución territorial, en virtud de una ley que discutieron hombres que sostuvieron tesis opuestas. Creo que entre los que sostuvieron la tesis contraria a la participación de la ciudad, está Sáenz Peña. Pero, en fin, el hecho es ese: se sancionó la ley y se dió participación en los impuestos directos sólo por motivos de hecho, como era la existencia de una deuda municipal que había que pagar.

Sr. Godoy. — Y también por otro motivo; porque el Congreso, como legislatura local, establece un impuesto en ese carácter.

Sr. Dickmann (A.). — Lo que implicaría la observación del señor diputado, es que el Congreso no tiene facultad para votar un subsidio a la municipalidad.

Sr. Godoy. — No significa eso.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Sírvanse no dialogar, los señores diputados.

Sr. Ministro de Hacienda. — Las situaciones de hecho las contempló este gobierno con respecto a la municipalidad y en forma notoria en el último año, acaso porque está en el Ministerio de Hacienda un hijo de la ciudad de Buenos Aires, se le ha dejado libre la plaza de Buenos Aires a la municipalidad para que gozara de un empréstito que sin la ayuda nacional jamás habría conseguido. Se le ha concedido después — y pronto estará a la consideración de este cuerpo — el producido íntegro de las letras italianas, empréstito al 8 % que la municipalidad no tendrá igual en muchos años.

La Nación no se despreocupa de la municipalidad. Hasta he aceptado que se le dé como subsidio una participación en el impuesto a los réditos, pero no tiene derecho, me parece, a demandar como justicia, una parte del impuesto unificado.

El señor diputado extendió después su ala protectora a los territorios nacionales y recordó lo hablado en la Co-

misión de Presupuesto, a la que concurrió una delegación del territorio del Río Negro, en la que estaba desde el intendente socialista hasta el reverendo padre X.

La cuestión planteada no fué la que se soluciona con este procedimiento. Allí hubo la grito inicial contra el impuesto al vino, motivada por la elevación del gravamen que de medio centavo pasaba a cinco centavos, y gravaría a todo el vino. Pero allí se demostró, también, a los representantes de Río Negro, que eso no les afectaba en sus intereses legítimos. Si es cierto que el vino de Río Negro, de medio centavo pasaría a pagar cinco, no es menos cierto que la misma ley impediría a la provincia de Mendoza seguir haciendo a Río Negro una competencia desleal, llevando su producto libre de impuestos al terreno donde compite con el vino de dicho territorio. De manera que la unificación pone al vino de esa región en igualdad de condiciones con las de los demás vinos argentinos, asegurándole el dominio de su zona de influencia, que hoy le es discutirlo por efecto de la ley provincial que esta unificación derogaría.

Es bastó para desvirtuar la reclamación de los representantes de Río Negro. No basta, en cambio, para desvirtuar las quejas que tengan los territorios en general, respecto al trato que se hace de sus necesidades por el Congreso argentino. Pero ese es un problema mucho más vasto, más complejo y, sobre todo, completamente ajeno a la cuestión de la unificación.

Si la República cumple con sus territorios todos los deberes que le impone su situación de madre patria, es una cuestión dudosa. Creo que no se les da lo que debiera dárseles y que habrá que cuidar sus intereses, pero que no es este el momento indicado. Dentro de breves días considerará el Congreso el presupuesto y esa sería una de las oportunidades en la que podría considerarse la cuestión, pero nunca ahora.

Concluyo, señor presidente, diciendo que reconozco la mejor voluntad y la mejor inspiración en los señores dipu-

tados que han promovido esta reforma, pero que en cambio no les encuentro ni un ápice de razón. (*Muy bien! ¡Muy bien!*).

Sr. Buira. — Pido la palabra.

Deseo pronunciar sólo dos palabras, porque no pensaba intervenir en el debate, sobre todo después de haberlo hecho otros colegas de mi sector en forma eficaz.

Pero las palabras del señor ministro de Hacienda, sobre lo de las últimas que ha pronunciado, deben llamar al Congreso a la reflexión y sobre todo al mejor cumplimiento de la legislación vigente por parte del Poder Ejecutivo nacional.

Cada vez que se plantea un problema de los territorios nacionales encontramos teóricamente una gran aceptación. Todos los señores diputados y los distintos secretarios del Poder Ejecutivo con quienes yo he conversado, están de acuerdo en que hay abandono y olvido absoluto de los problemas de los territorios nacionales; pero nunca encuentran la oportunidad de empezar a atender con alguna equidad y justicia sus necesidades más inmediatas.

Ahora, el señor diputado Dickmann presenta un agregado al artículo 5º, que es de toda justicia. Hemos escuchado al señor diputado Graffigna, por San Juan, levantar su voz de protesta porque no se atendían los intereses de su provincia, que tiene más habitantes que La Rioja y que Jujuy. Pero, ¿qué diría el señor diputado Graffigna si fuera habitante del territorio del Chaco, con una población de 214.160 personas y no se le da un solo centavo? ¿Qué diría de los territorios de La Pampa, Río Negro y Misiones?

Yo creo que la Honorable Cámara procederá con toda justicia votando el agregado. El señor ministro ha dicho que los territorios no tienen establecido ningún impuesto. Pero, ¿por qué no lo tienen? Porque el Poder Ejecutivo no ha cumplido con el artículo 46 de la ley 1532, que faculta a los territorios con más de 30.000 habitantes a tener una legislatura. Si los territorios contaran con legislatura hubieran es-

tablecido impuestos para atender sus necesidades más elementales. Quiere decir que se invoca la negligencia del Poder Ejecutivo y del Congreso, como argumento para desconocer los derechos de los territorios...

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Es una ley un tanto antigua y no es este Poder Ejecutivo el que ha dejado de cumplirla. La ley tiene 30 años.

**Sr. Buira.** — Efectivamente; pero deben cumplirse sus disposiciones.

Posiblemente por los diputados de provincia no me han importado en el agregado que proponen el señor diputado Dickman; pero yo quiero que quede el precedente del voto de los señores diputados, y por eso voy a pedir que este agregado se vote nominalmente.

**Sr. Arce.** Pida la palabra.

El señor ministro ha considerado el aspecto institucional de la proposición formulada por el señor diputado por la Capital. Cabe, sin embargo, establecer una diferencia entre el asunto que consideramos ayer, que está en el artículo 30 de este despacho, a propósito del impuesto a los réditos, y la fórmula que él ha presentado hoy y que he leído con el mayor detenimiento, a objeto de interpretar su finalidad. Yo no creo que haya inconveniente — si el Congreso lo quiere — en votar el concepto de la proposición del señor diputado por la Capital que, como lo ha reconocido el señor ministro de Hacienda, ha sido sostenido con buenos argumentos. Pero lo que es de toda evidencia, si se quiere sancionarla, así como se hace con la contribución territorial, es que, llegado el momento de discutirse el presupuesto, en el capítulo referente a los recursos se proponga que el 6 % de lo que se recaude en la Capital Federal por concepto de impuestos a los consumos corresponderá a la Municipalidad de la Capital. Si la proposición prosperara — tengo la impresión de que podría prosperar, pero no sé qué diría el gran cajero del fisco nacional — estaría ahí perfectamente ubicada. Donde no la encuentro de ninguna manera ubicable,

ni para el impuesto a los consumos ni para el impuesto a los réditos, es en una ley de unificación de impuestos.

Es todo lo que quería agregar a las consideraciones hechas por el señor ministro de Hacienda.

Pero antes de terminar, yo llamaría la atención del señor diputado Buira sobre un dato numérico que quizá le haya pasado desapercibido. El territorio del Chaco parece tener, según cálculos realizados, 88.436 habitantes; en cambio, la provincia de San Juan cuenta con 184.221.

**Sr. Buira.** — La información del señor diputado es muy antigua. Yo me he referido a un censo mandado levantar por el gobernador del Chaco, que está documentado en el número reciente del Boletín de la Biblioteca del Congreso Nacional.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Que es socialista e independiente.

**Sr. Buira.** No interesa la filiación política.

El censo arrojó 214.160 habitantes para el Chaco.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — He recordado la filiación del gobernador porque eso demuestra la abnegación con que procedemos en este caso. Se trata de un territorio donde tenemos alguna fuerza política y, sin embargo, propiciamos el rechazo de la proposición.

**Sr. Buira.** — Permítame el señor ministro.

Yo no había interpretado así el argumento que hacía el señor ministro. Se ha referido a que el gobernador del Chaco es socialista e independiente, como para darle aspecto político.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — No sé cómo voy a dárselo!

**Sr. Buira.** — Muy bien.

El gobernador del Chaco es la representación de la voluntad del señor presidente de la República: no es elegido por el voto popular.

**Sr. Presidente (Noble R. J.)** La Presidencia desea saber si la proposición de votación nominal está suficientemente apoyada.

—Resulta suficientemente apoyada.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Se va a votar nominalmente.

—Practicada la votación nominal:

**Sr. Prosecretario (Madero).** — Han votado 56 señores diputados por In negativa y 35 por la afirmativa, en la siguiente forma:

—Por la negativa, los señores diputados: Ahumada, Alonso, Amadeo y Videla, Amodeo, Aráoz (Ernesto M.), Aree, Arrieta, Basualdo, Biancofiore, Bruchou, Buitrago, Bustillo, Cáceres, Candia Cárcano, de las Carreras, Carrús, Castro, Contte, Cordero, Corominas Segura, Costa Méndez, Courel, Dávila, Fernández, Ferreira, García Gorostanga, Godoy, Gómez Rincón, González (B. S.), González (V.), Graffigna, Grisolia, Groppo, Jardel, Martínez, Palacio, Pintos, Pita, Puoyrredon, Quiroga, Radío, Ruiz, Salas, Salcedo, Santillán, Simón Padrós, Solís, Speroni, Uriburu, de la Vega, Vicchi, Videla, Videla Dorna, Zarazaga y de la Zerda.

—Por la afirmativa, los señores diputados: Agüero, Ameri, Benegas, Besasso, Bogliolo, Briuolo, Buira, Bunge, Castañeiras, Coca, Dickmann (A.), Dickmann (E.), Ghioldi, Giménez, González Masceda, Iribarne, Iriondo, Korn, Lamesa, Molina, Moret, Mouchet, Movsiehoff, Noble (J. A.), Oddone, Palacín (M.), Palacín (P.), Penna, Pérez Leirós, Ramieoni, Repetto (N.), Rozas, Ruggieri, Vidal Baigorri y Vionnet.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Queda rechazado.

En consideración el artículo 6º.

**Sr. Aráoz (Ernesto M.).** — Pido la palabra.

La representación demócrata nacional de Salta no pensaba intervenir en la discusión de este despacho, cuyo informe y defensa han sido hechos con tanto calor y autoridad por el señor ministro de Hacienda, por el señor miembro informante de la comisión y por otros señores diputados que han intervenido directamente en su elaboración. Pero algunas apreciaciones vertidas en el curso de este debate, acerca de la com-

pensación solicitada y otorgada por la comisión a la provincia de Salta respecto a los impuestos a In producción, nos obligan a expresar algunos conceptos. Procuraré ser lo más breve posible.

Asistimos, evidentemente, a uno de los debates más fundamentales de esta Cámara. Se ha dicho con propiedad en la sesión de ayer, que de todos los asuntos que se han considerado en estos últimos años por el Congreso, posiblemente ninguno revista la trascendencia institucional del que ahora nos ocupa. El tiende a regimentar y coordinar los intereses de la Nación y de las provincias, y a poner coto al desorden y a la anarquía impositiva creados en algunos casos por la lucha de los intereses regionales, y en otros, por el desenfreno de los apetitos presupuestivos. Noble propósito, señores diputados, el contenido en esta iniciativa que, pese a sus beneficios generales, ofrece, sin embargo, algunos delicados aspectos que se vinculan con cuestiones de carácter institucional cuyo alcance y trascendencia deben ser bien medidos por los señores diputados ahora que estamos tratando en particular este asunto.

El aspecto a que se refería el reclamo planteado por la provincia de Salta ha sido felizmente resuelto, no arbitrariamente como se ha dicho, sino con toda justicia.

Nosotros no creemos que este proyecto sea inconstitucional aunque de hecho pueda provocar cierto relajamiento de las autonomías provinciales.

Se la ha sostenido con razón que el proyecto en debate no se sale de los lineamientos constitucionales. El señor ministro de Hacienda, hombre de ley, es también un estadista inteligente y ha sabido salvar con habilidad las formas constitucionales de su proyecto. Dentro de la flexibilidad de las cláusulas legales y de la soltura que la jurisprudencia ha dado a los resortes aparentemente rígidos de nuestra Carta Fundamental, ha considerado el Poder Ejecutivo que los impuestos al consumo pertenecen concurrentemente a la Nación y a las provincias, como lo ha sostenido la Suprema Corte de la Na-

ción, en virtud de hallarse éstos comprendidos en las contribuciones a que se alude en el artículo 4 de la Constitución nacional, cuando refiriéndose a los recursos con que Ita de formarse el tesoro de la Nación, dice: «y de las demás cottribtciottes que equitativa y proporcionalmente a la población sancione el Congreso federal.»

Pero lo que no nos ha cottvencido es ese entrevero que S e hace de los impuestos a la producción del vino, del azúcar y del tabaco, viejas y genuinas industrias del interior, para confundirlos dentro de la masa de los recursos generales con los impuestos propiamente destinados al consumo, de caracteres distintos a los impuestos a la producción.

—Ocupa la Presidencia, el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, don Antenor R. Ferreira.

No es mi ánimo provocar una discusión acerca de si los impuestos a la producción lo son también al consumo, porque de no serlo, estarían siempre comprendidos en el caso del inciso 2º del artículo 67 de la Constitución nacional, que autoriza al Congreso a sancionarlos excepcionalmente y a término fijo, y estas circunstancias han sido también tenidas en cuenta por el Poder Ejecutivo, al estructurarlos en el proyecto, aunque en el mensaje y en la exposición del señor ministro hayan sido considerados como impuestos al consumo. Pero deseo, sí, recordar a la Honorable Cámara que los impuestos a la producción han sido tradicionalmente reconocidos y usados como un recurso ordinario de las provincias.

Que el productor carga ese impuesto al consumidor cuando puede hacerlo, que el impuesto a la producción gravita sobre el precio de costo de la mercadería, son hechos económicos ajenos al impuesto mismo, que se presentan en casi todas las industrias o actividades productivas gravadas por el Estado. Llámese el gravamen impuesto a la producción o patente fija.

Esta distinción entre ambos impuestos encierra, desde luego, una sutileza

que no interesa mayormente dilucidar ahora, ante las previsiones contenidas en el despacho; pero hay un hecho evidente que deseo destacar: el impuesto a la producción lo paga en cada provincia el productor y éste puede o no cargarlo al consumidor de la misma provincia o de fuera. Pero los habitantes de esa provincia pueden también consumir el mismo producto venido de otra provincia, donde no se ha pagado el impuesto a la producción o donde ese impuesto ha sido establecido en otra forma. En cambio, el impuesto propiamente al consumo lo pagan sin excepción todos los consumidores de una provincia, cualquiera sea la procedencia de la mercadería. Esto explica que el impuesto al consumo tenga una relación más directa que el impuesto a la producción, con la población de cada provincia.

El impuesto a la producción tiene al menos, señor presidente, la finalidad legal, específica, de gravar al productor, para que éste contribuya con parte de sus ganancias a la formación del tesoro fiscal que las provincias tienen no sólo el derecho, sino el deber constitucional de formar para atender con él sus propios servicios administrativos. Es, pues, interesante dejar establecido que, a nuestro juicio, una cosa son los impuestos a la producción y otra los impuestos al consumo.

Decía el señor diputado Godoy, en su brillante exposición de ayer, que si es exacto que las provincias han poseído y poseen la facultad constitucional de crear gravámenes a la manera de recursos naturales con que nutrir sus tesoros para atender las necesidades públicas, no puede decirse que hayan estado cometiendo abuso cuando han ejercitado, dentro de la órbita constitucional, esa facultad que les es inherente. Y agregaba: «Han ejercitado una facultad legítima, y no se les puede exigir que cesen en el ejercicio de esa facultad sino por un renunciamento voluntario.»

—Suenan la campanilla que anuncia la expiración del término reglamentario para el uso de la palabra.

Sr. Presidente (Ferreira). — Ha venido, señor diputado, el término a que tiene derecho.

Sr. Aráoz (Ernesto M.). — Pido una prórroga, y o y a ser breve, procuraré sintetizar.

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a votar si se autoriza al señor diputado por Salta, por un cuarto de hora, para continuar en el uso de la palabra.

— Resulta afirmativa.

Sr. Aráoz (Ernesto M.). — Las palabras del señor diputado Godoy expresan una verdad evidente.

Tampoco podrá aceptarse lo que se ha dicho por algunos señores diputados, que las provincias al gravar sus industrias, atentaban contra ellas, y que el gravamen provincial a la industria es un absurdo. La Nación las va a gravar, sin embargo, ahora, porque sus necesidades financieras la apremiaba hacerlo. Las provincias lo hicieron también en uso de su derecho propio por las mismas razones, aunque es evidente que en muchos casos se ha abusado en forma intolerable de esa facultad. La Nación para contemplar esas situaciones de hecho, vale decir, esos intereses creados, tiene ahora que indemnizar a esas provincias en algunos casos, sobre una base inicial mayor a lo que la Nación va a cobrar dentro de la misma provincia.

Pero aquí se trata de que las provincias renuncien por el término de veinte años a cobrar sus impuestos a la producción, facultad ésta propia y legítima de las mismas, que le ha sido reconocida por la Constitución nacional, y para hacerlo es indispensable que ellas sean compensadas. Así lo ha expresado también el señor diputado por Catamarca, sin percatarse, tal vez, cuando él se oponía a esta compensación tan justamente reclamada por la provincia de Salta, que al adherir a la ley, cada provincia renuncia, no sólo a un beneficio material, sino también a una posibilidad evidente de obtener ese beneficio usando de sus propios recursos constitucionales y utilizando para fines

fiscales su propia riqueza. La adhesión a esta ley en base al sistema de compensaciones establecido en el proyecto del Poder Ejecutivo, no puede tener el mismo sentido para aquellas provincias que han alcanzado ya todo su desarrollo industrial y que han colmado su capacidad impositiva, que para las que, procediendo prudentemente han estado trabajando con vistas al futuro y que con ese fin han exceptuado temporariamente de impuestos a su producción o mantenido dentro de ese concepto una moderación impositiva de verdadero fomento industrial, con el propósito de radicar o ampliar sus industrias, como lo ha hecho la provincia de Salta. Si la Nación grava a sus industrias, la provincia no se opone a ello, pero reclama para sí una participación legítima, porque si la industria paga, ha desaparecido para la provincia el beneficio económico de ese fomento industrial.

Es esta una situación de hecho — señor diputado por Catamarca — tan respetable o más que la de las provincias que han venido inflando sus presupuestos en base al cobro de impuestos extorsivos a la producción. Salta no ha reclamado participación de los impuestos a la producción de vinos y de tabacos por una sencilla razón de circunstancia, pues sabía que era menester demostrar que estos impuestos podían ser soportados por la producción. No es lo mismo cuando ese impuesto va a ser uniforme en todo el país.

Salta no ha gravado a esas industrias porque las condiciones en que ellas se desenvuelven actualmente en su lucha económica con los productos similares de las otras provincias, no lo permitían gravarlas sin ocasionar a sus productores un perjuicio irreparable.

Sólo es éste, señor presidente, el caso del azúcar y de otros productos comprendidos en sus leyes temporarias de fomento industrial, que sólo tienen un sentido de oportuno estímulo y que comportan un sacrificio momentáneo de sus recursos propios, con un fin superior de gobierno, que generalmente ha sido contemplado por todos los go-



bernantes de aquella provincia, cualquiera haya sido su filiación política.

Las provincias argentinas no podrán rehuir este llamado al orden y a la disciplina financiera, que en buena hora les ha hecho el gobierno de la Nación, en nombre de los principios de unidad económica proclamados por la Constitución Federal que quiso la supresión de las aduanas interiores y de los derechos diferenciales. Pero ellas tienen también el deber ineludible de cuidar las formas de esta ley y de exigir la legítima compensación que les corresponde, ya que sólo podrán aceptar esa adhesión sin desmedro de sus intereses y sin renunciar a facultades que les son propias. Ha de tenerse presente, señores diputados, que varias constituciones provinciales prohíben expresamente a los poderes públicos de las provincias renunciar a los derechos que las provincias se reservaron al organizar el país, lo que obligaría a ajustar los términos en que están concebidos algunos artículos del despacho, a fin de que no resulte de ellos una renuncia de facultades inalienables, sino que esta ley comporte el reconocimiento a la Nación de una facultad concurrente en lo que respecta a los impuestos al consumo, y nos lleve al otorgamiento, por parte de las provincias, de un poder a la Nación para el cobro de la cuota, parte que a ellas les corresponde por derecho propio en la percepción de esos impuestos como en los de la producción, sancionados temporalmente. De ese modo los fondos de In.; provincias, cobrados por la Nación en virtud de un poder conferido, serían fondos propios de las mismas, que la Nación no podría retener un solo instante sin incurrir en las responsabilidades inherentes al mandato.

Este aspecto ha sido en cierto modo contemplado en el despacho. Es necesario, señor ministro de Hacienda, establecer claramente en esta ley todas las garantías y los recaudos indispensables para que ella no pueda ser usada por el gobierno central como un arma de presión política contra los gobiernos locales que no respondan a sus tendencias partidarias, o a cual-

quier otro propósito de gobierno, porque de lo contrario podría presentarse un caso semejante a aquel en que el Poder Ejecutivo de la Nación demoró la entrega de las subvenciones escolares o de cualquiera otra clase de subsidios con que la Nación coopera al gobierno de las provincias, sin que éstas puedan hacer otra cosa que gestionar su envío, que reclamar esa dádiva que la Nación les otorga. Si no quedase bien esclarecido en la ley este concepto de los fondos propios, las provincias podrían quedar entregadas a la capricho y a la prepotencia de los gobiernos centrales fuertes, con lo que se habría destruido la base económica de nuestro régimen federal.

Los diputados por Salta hemos votado en general el proyecto entendiendo que establecidas las compensaciones, él comporta un gran beneficio tanto para la Nación como para las provincias, pero cuidaremos en la votación en particular de salvar todo aquello que pueda perturbar nuestro sistema de gobierno.

Nada más.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Se va a votar el artículo 6º, con la modificación introducida por la comisión, en cuanto se refiere a la provincia de Salta 3º de que dará cuenta la Secretaría.

**Sr. Secretario (Zavalla Carbó).** — Este artículo, la comisión lo ha modificado en cuanto se refiere a la provincia de Salta, substituyéndolo en la columna relativa a recaudación, la cantidad de 1.500 por In. de 2.250 y en la columna relativa al promedio ha substituído la cantidad de 300 por la de 450.

**Sr. Pena.** — Yo desearía conocer la opinión del señor ministro de Hacienda acerca de esta modificación que la comisión introduce en su despacho.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Yo estoy en contra, porque sigo creyendo que si la ley toma como base lo que se ha recaudado no se puede tener en cuenta sino eso.

**Sr. Ahumada.** — Pido la palabra.

Ayer expuse un criterio exactamente igual al que acaba de sostener el

señor ministro. Si la comisión ha tomado como base y como criterio inicial, el promedio de las recaudaciones por concepto de impuestos a la producción de estas provincias, debe atenderse necesariamente, también, en el caso de Salta, a los resultados de la información oficial; si Salta informa oficialmente que por impuestos a la producción recaudó 1.500.000 pesos en el último quinquenio, la comisión y la Cámara no pueden hacer otra cosa que ajustarse a ese dato oficial. Pero he reconocido asimismo que esta provincia tiene una situación excepcional y queda hasta cierto punto desmejorada en esta ley, por haber hecho bien anteriormente al no establecer esos impuestos a la producción; y de ahí que habría aceptado una solución que resultara justificable y que no pusiera en contradicción el texto del artículo 6º con las cifras expresadas a continuación del mismo.

La proposición del señor diputado por Salta, en realidad, no salva el inconveniente, porque arriba se dice una cosa y la cifra propuesta no guarda relación con el texto del artículo, de tal modo que se mantiene la situación anterior. Si anhela que en el caso de su provincia se contemple por nuestra parte, rogaría al señor diputado por Salta que modifique su proposición, dándole una forma que sea conciliable con las observaciones que acabo de hacer.

Sr. Presidente (Ferreira). — La Presidencia advierte que se ha anunciado que la comisión modifica el artículo.

Sr. Aráoz (Ernesto M.). — Y nosotros aceptamos.

Sr. Ahumada. — No, señor presidente; la comisión no lo ha modificado.

Sr. Pena. — El señor diputado habla a nombre de la comisión, y yo también soy miembro de la comisión. Y la comisión no ha modificado su despacho.

Sr. Martínez. — Pido la palabra.

Un lord inglés dijo una vez en el Parlamento: «He oído muchos discursos en mi vida: algunos han hecho cambiar mi opinión, ninguno me ha hecho

cambiar el voto.» Yo diría al revés: las razones teóricas aducidas para la enmienda propuesta para la provincia de Salta no me han convencido, ni me convencerán; pero estoy empeñado en la obra, que considero trascendental, de cooperar a la realización de esta unificación de impuestos internos.

Desde el primer momento la provincia de Salta planteó como cuestión capital, para su adhesión a la unificación, que se tuviera en cuenta la situación especial en que se quedaría, siendo una provincia productora de artículos que en otras soportan fuertes impuestos, que son pagados por el consumo nacional, por haber tenido una política de desgravar, de no aumentar esas gabelas, quedaba en situación de inferioridad.

Ya dije que tanto el Poder Ejecutivo como la comisión han debido en algunos casos, apartarse de las directivas teóricas para enfocar el problema con criterio realista. Planteado el caso de Salta por el señor ministro de aquella provincia, la mayoría de la comisión reconoció una cifra que significaba algo así como los dos tercios, que era una cifra arbitraria, porque se refería a impuestos que no habían sido recaudados, pero que eran impuestos que la provincia podía recaudar a partir del año 1937 y que, indudablemente los recaudaría por el desarrollo y mayor número de necesidades fiscales que lógicamente vendría a tener. Posteriormente insistió esta provincia, hizo una cuestión de Estado respecto de su adhesión, y entonces los diputados de la mayoría de la comisión creímos que un asunto de tanta importancia, en que la cifra global de la unificación de impuestos internos es de 185.000.000 de pesos, no podía malograrse por 15.000 pesos, más o menos, que se dieran a la provincia de Salta, porque eso no guardaba proporción con la importancia del asunto. Entonces, con un criterio realista y dejando a un lado los principios, que muchas veces suelen servir para dificultar la realización de cosas útiles, los diputados de la mayoría aceptamos, y

en su nombre así lo expresé, y ha quedado consignado en el informe que tuve el honor de presentar a esta Honorable Cámara.

Sr. Dickmann (A.). — Hago notar al señor diputado — y le llamé y a la atención al señor ministro al respecto — que hay una nota publicada hoy en los diarios que parece ser texto oficial del gobierno de Salta, por la que no sólo reclama los 640.000 pesos que le fueron denegados en la comisión, en parte, sino que también reclama, para poder adherir a la unificación de impuestos, el establecimiento de una junta autónoma de la Nación y la provincia para el manejo de esta ley. De manera que no sé si con lo que va a votarse ahora se dará por satisfecha la provincia de Salta.

Sr. Aráoz (Ernesto M.). — Estamos colaborando en ese sentido.

Sr. Martínez. — Tengo informaciones fidedignas, e en virtud de las cuales he cambiado la opinión y presentado la resolución aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión de Presupuesto, según las cuales la provincia de Salta acepta la adhesión a esta ley con la modificación propuesta.

Sr. Gómez Rincón. — Pido la palabra.

El gobierno de Salta ha estado representado en la reunión de ministros y allí hizo cuestión capital del asunto que ha de resolver ahora la Comisión de Presupuesto.

Ese comunicado a que se refiere el señor diputado Dickmann es del ministro de Hacienda, que no es el gobierno de Salta. El gobierno de Salta tendrá que adherir a esta ley por la que a su vez dicta la Legislatura. No podemos los diputados de esa provincia, ni de las tletrías, comprometer resoluciones futuras de las legislaturas provinciales, pero nuestro propósito aquí, como representantes de la provincia, es colaborar a la sanción de esta ley evitando grandes lesiones que se van a producir en las finanzas provinciales. Tratándose de una provincia que es la única que va a dar ganancias

a la Nación en esta nueva organización de los impuestos internos. . .

Sr. Martínez. — Si entremos en el terreno de las ganancias.

Sr. Gómez Rincón. — Digo ganancias en este sentido: la provincia de Salta no irrogará desembolsos al gobierno federal porque su industria vinícola va a contribuir ahora con 350 ó 400.000 pesos por año. Esa industria no estaba gravada y surgirá el impuesto como consecuencia de la ley. Tampoco estaba gravado el azúcar y por esta ley va a pagar 2 centavos, lo que producirá a la Nación arriba de 650.000 pesos anuales, no contundo 10 que reclama Salta por lo que respecta al alcohol.

Así verá algún señor diputado de la izquierda, quien manifestó que Salta llevaba todas las gangas y beneficio:, que será la única provincia que, a pesar de las mejoras propuestas por la Comisión de Presupuesto, sale perdiendo con relación a las otras en esta solución que se da en beneficio de la unidad económica de la Nación. Esa es la situación real: no buscamos sino colaborar en este propósito con el gobierno federal y deseamos una solución intermedia que, como digo, no le costará un peso a la Nación.

Sr. Pena. — Pido la palabra.

Respecto del caso que se plantea a propósito de la provincia de Salta, no podría seguirse adelante si no dejarse constancia de que en el artículo 26 del despacito que consideramos se dice, en su artículo 2º, que las provincias adheridas mantienen el derecho de aplicar gravámenes al petróleo, como también ellas y sus municipalidades, patentes y licencias especiales al comercio de bebidas alcohólicas, tabaco, joyas, naipes y perfumes.

Es un hecho muy conocido que la provincia de Salta acaba de sufrir en estos últimos tiempos una importante transformación de su sistema rentístico, y que este proyecto de unificación respeta una solución que se buscaba con la nacionalización del petróleo y que no se ha conseguido, pero que mantiene respetando la jurisdicción de

las provincias. In facultad de reservar-se ellas, no la participaci6n en lns regalías t l r l petróleo a cargo de la Naci6n, sino de fijarlas y cobrarlas ellas mismas. L a provincia d e Salta tiene hoy su presupuesto financiado admirablemente por el petróleo. De manera que la reclamaci6n que se hace es doblemente improcedente. Lo es porque se trata de querer computar como entrada de la provincia una suma de dinero que n o ha ingresado, con la explicaci6n de que habría de ingresar como consecuencia de gravámenes ulteriores. Este es un hecho que podría presentarse a todos las provincias. La fantasía impositiva de cualquier provincia podría ahora presentarnos un cuadro de l a s posibilidades de seguir gravando tocns estas cosas y reclamar en consecuencia una participaci6n.

Quiero llamar la atenci6n sobre que no se han leído los cuadros y no se ha hecho cuesti6n porque t o d o está articulado dentro de un sistema de contabilidad. Todo l o que constituye la parte numérica d e este despacho está articulado y presentado como desarrollo y consecuencia en un plan explicativo que prácticamente supone una cuesti6n definitiva y resuelta como despacho de la comisi6n y ley necesaria del Congreso. Cualquier modificaci6n en c l enunciado de las cantidades básicas traería la consecuencia de tenerse que desarrollar en el cuadro anterior, modificando substancialmente las cifras que son las que han servido al acuerdo de la comisi6n para presentar este despacho.

D e manera que me parece "[1]" la consideraci6n que ha hecho el seño r diputado es improcedente, porque n o es exacto que la provincia de Salta vaya a sufrir en sus recaudaciones fiscales un quebranto tan considerable, toda vez que buena parte del porcentaje actual deriva principalmente de regalías sobre el petróleo. Es una provincia enriquecida fiscalmente hace poco tiempo. Y la reclamaci6n es improcedente porque ya se sabe que las rentns de la Naci6n van a cargar con un quebranto inicial de 15.000.000 de pe-

sos. y se ha planteado en las sesiones de ayer y de hoy con insistencia, la gravedad de toda esta legislaci6n en cuanto echa por tanto tiempo sobre las espaldas de la Naci6n, In obligaci6n de dar cantidades fijas de dinero sin tener la seguridad de rendimientos que se ajusten exacta y estrictamente a las previsiones d e este plan.

De manera que la Honorable Cámara hará bien en escuchar l n palabra del seño r ministro de Hacienda que es contraria a este aumento de la participaci6n que corresponde a Salta, porque es evidente que no está justificada por las razones que aquí s e han dado, a las cuales he agregado, por parecerme indispensables, las que la Cámara ha escuchado. P e r o debe saberse cuál es la mayoría de la comisi6n, porque a e s t s respecto — aunque hago fe a la palabra del presidente d e l a comisi6n —, he tenido oportunidad de escuchar al seño r diputado Ahumada, que es también miembro d e la Comisi6n de Presupuesto, pronunciándose en contra. Nosotros también estamos en contra. De modo que yo no sé cómo se ha hecho esa mayoría. La mayoría puede surgir de un convenio verbal, por lo que me parecería conveniente pasar a cuarto intermedio a fin de provocar una consulta real y seria. de la comisi6n para votar luego el artículo.

En ese sentido, dejo formulada la moci6n.

**Sr. Corominas Segura.** — Pido la palabra.

La moci6n que acaba de formular el seño r diputado por la Capital, de pasar a cuarto intermedio en este momento, no tiene en realidad ningún objeto. La Cámara desarrolla normalmente su labor y puede continuar trabajando hasta la hora 21 sin dificultades. Se ha debatido ampliamente el artículo en discusi6n y corresponde pronunciar-se sobre él.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Se va a votar la moci6n de orden de pasar a cuarto intermedio.

— Resulta negativa.

Sr. Presidente (Ferreira). — Continúa la consideración del artículo 6°.

Sr. Ghioldi. — Pido la palabra.

Para hacer constar un simple dato. El Proyecto del Poder Ejecutivo concedía a la provincia de Salta la suma de 50 ó 58.000 pesos. La comisión, en una operación, no lo suficientemente explicada, multiplicó esa participación elevándola a 300.000 pesos. Y ahora sí pretende todavía aumentarla a 450.000, no sobre una recaudación real, sino sobre una hipotética recaudación que podrá ocurrir dentro de algunos años.

Este solo dato basta para demostrar la improcedencia del pedido de la diputación por Salta.

Sr. Ministro de Hacienda. — Es exacto.

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a votar el artículo 6°, en la forma propuesta que se ha dado lectura.

— Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Ghioldi. — Los votos existen, pero la razón está ausente.

— En consideración el artículo 7°.

Sr. Martínez. — Señor presidente: De acuerdo con la votación de la Cámara en el artículo anterior, que ha modificado la cifra básica para la provincia de Salta, corresponde corregir en el artículo 7° y en algunos otros los cuadros de distribución, tarea que realizará la Secretaría.

Sr. Presidente (Ferreira). — Así se hará.

Sr. Pena. — Lo grave no es el comienzo sino el final de todo esto. Es la multiplicación de los panes... Aquí, de los pesos.

— Se llama para votar.

— Después de un momento:

Sr. Presidente (Ferreira). — Por 110 haber número en la casa, queda levantada la sesión.

— Era la hora 20 y 43.

## COMISIONES INTERNAS DE LA HONORABLE CAMARA

### Planilla de asistencia

#### *Presupuesto y Hacienda*

Octubre 17

Miembros presentes, señores diputados: José & Heriberto Martínez, Adolfo Dickmann, Miguel A. Aguirrezabala, Luis Alberto Ahumada, Alfredo J. Alonso, Herminio Arrieta, Manuel V. Besasso, Rómulo Bogliolo, Eduardo Bruchou, José M. Bustillo, Américo Ghioldi, Raúl Godoy, Pedro Groppo, Héctor S. López, Juan F. Morrogh Bernard, Julio A. Noble, José Luis Pena, Juan Simón Padrós, Abraham de la Vega.

Octubre 19

Miembros presentes, señores diputados: José Heriberto Martínez, Adolfo Dickmann, Miguel A. Aguirrezabala, Luis Alberto Ahumada, Alfredo J. Alonso, Herminio Arrieta, Manuel V. Besasso, Rómulo Bogliolo, Eduardo Bruchou, José M. Bustillo, Américo Ghioldi, Raúl Godoy, Pedro Groppo, Héctor S. López, Juan F. Morrogh Bernard, Julio A. Noble, José Luis Pena, Juan Simón Padrós, Abraham de la Vega.

Noviembre 8

Miembros presentes, señores diputados: José Heriberto Martínez, Adolfo Dickmann, Miguel A. Aguirrezabala, Luis Alberto Ahumada, Alfredo J. Alonso, Herminio Arrieta, Eduardo

Bruchou, José M. Bustillo, Américo Ghioldi, Raúl Godoy, Pedro Groppo, Juan F. Morrogh Bernard, Julio A. Noble, José Luis Pena, Juan Simón Padrós, Abraham de la Vega.

Miembros ausentes, con aviso, señores diputados: Manuel V. Besasso, Rómulo Bogliolo, Héctor S. López.

Noviembre 9

Miembros presentes, señores diputados: José Heriberto Martínez, Adolfo Dickmann, Miguel A. Aguirrezabala, Luis Alberto Ahumada, Alfredo J. Alonso, Herminio Arrieta, Rómulo Bogliolo, Eduardo Bruchou, José M. Bustillo, Américo Ghioldi, Pedro Groppo, Juan F. Morrogh Bernard, Julio A. Noble, Juan Simón Padrós, Abraham de la Vega.

Miembros ausentes, con aviso, señores diputados: Manuel V. Besasso, Raúl Godoy, Héctor S. López, José Luis Pena.

Noviembre 12

Miembros presentes, señores diputados: Adolfo Dickmann, Luis Alberto Ahumada, Alfredo J. Alonso, Herminio Arrieta, Eduardo Bruchou, José M. Bustillo, Américo Ghioldi, Raúl Godoy, Pedro Groppo, Héctor S. López, José Luis Pena, Juan Simón Padrós, Abraham de la Vega.